



NODOXXI

ISSN 0719-5133

ISSN 0719-496X

Balances de la transición

(4) NEOLIBERALISMO Y CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA:

Un balance político de la transición

(14) DESARROLLO ECONÓMICO Y DESIGUALDAD DURANTE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN CHILE (1990-2009)

(24) LA CULTURA EN LA TRANSICIÓN:

La eficiente construcción de una nueva lógica

(30) LAS DEUDAS DE LA TRANSICIÓN Y EL LARGO CAMINO EN DERECHOS HUMANOS

(40) LIBERALISMO Y NEOLIBERALISMO:

El Partido Liberal en el Frente Amplio

Entrevistas

(48) DIAMELA ELTIT

(59) DANIEL JADUE

(68) CARLOS MONTES

(76) JUAN IGNACIO LATORRE

(86) CLAUDIA MIX

www.nodoxxi.cl



CUADERNOS DE COYUNTURA

Balances de la transición

CUADERNOS DE COYUNTURA
Número 22
Publicación bimestral | octubre 2018
Fundación Nodo XXI
Santiago | Chile
www.nodoxxi.cl

Presidente Fundación Nodo XXI
Carlos Ruiz Encina

Directores Fundación Nodo XXI
Francisco Arellano
Camila Miranda
Víctor Orellana
Giorgio Boccardo
Daniela López

Director Cuadernos de Coyuntura
Sebastián Caviedes

Editores Cuadernos de Coyuntura
Felipe Ruiz
Pablo Contreras
Nicolás Román

Diseño
Priscilla Muñoz



Suscripción y contacto
suscripciones@nodoxxi.cl



www.nodoxxi.cl

Suscríbete a los CUADERNOS DE COYUNTURA



Nuestra fundación no tiene vinculación con los grandes poderes económicos del país y es independiente del sistema de partidos políticos actuales. Estamos comprometidos con la creación de nuevos puntos de vista, que ayuden a comprender y transformar la realidad, así como a avanzar hacia una sociedad de derechos plenamente democrática. Queremos continuar en esa senda de autonomía y para ello las suscripciones constituyen un gran aporte. Te invitamos a ayudarnos a continuar con nuestro trabajo.

MODALIDAD DE VENTA	VALOR	DETALLE
Venta simple	\$5.000	Venta unitaria, sin envío.
Suscripción semestral	\$25.000	3 números correlativos, incluye envío a domicilio. 1 ejemplar por edición.
Suscripción anual simple	\$35.000	5 números correlativos, incluye envío a domicilio. 1 ejemplar por edición.
Suscripción anual doble*	\$50.000	5 números correlativos, incluye envío a domicilio. 2 ejemplares por edición.
Suscripción anual triple	\$60.000	5 números correlativos, incluye envío a domicilio. 3 ejemplares por edición.

**La suscripción anual doble o triple, está pensada para suscripciones institucionales: organizaciones sociales, centros culturales, partidos políticos, medios de comunicación, etc.*

¿Te interesa suscribirte?

Si tienes dudas o consultas, por favor escríbenos a suscripciones@nodoxxi.cl o contacta directamente a **Felipe Ruiz**, Encargado de Extensión de la revista al teléfono **+569 77928179**.





BALANCES

DE LA TRANSICIÓN

Fuente: radio.uchile.cl

Corría el segundo fin de semana de agosto y la polémica se instalaba por el nombramiento de Mauricio Rojas como ministro de las Culturas. El ex parlamentario en Suecia y miembro de la Fundación Para el Progreso alcanzaba una notoriedad inesperada al difundirse extractos de su libro, dedicado a su desencanto con el socialismo, donde, con lamentable ignorancia, afirmaba que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos era, ante todo, un montaje. Estos dichos lo obligaron a renunciar y generaron un transversal rechazo, dando pie incluso a un masivo acto de protesta en la explanada del propio museo.

Hubo un efecto político inmediato y particular que fue acompañado de otro más general. El conflicto por los dichos del fugaz ministro reavivó la vieja “teoría de los dos demonios”, que delimitó la discusión de una nueva conmemoración del golpe de Estado —cuarenta y cinco años—, la dictadura y el plebiscito que le puso término hace treinta años. Una vez más no es posible escapar de la dicotomía

paralizante entre dictadura y democracia que habitualmente cierra el debate sobre el presente, estrategia tan útil a sectores de la derecha y la ex Concertación, ambos reacios a hablar críticamente sobre el legado de la transición y su superación justo cuando tomaba cuerpo.

Es que, quizás por la fuerza de las efemérides, se llevaron a cabo un gran número de eventos conmemorativos, a los que fueron invitados a debatir los diversos sectores. Y, aunque en muchos casos se habló en un código de desarme de la oposición entre dictadura y democracia, en prácticamente todos, la convocatoria fue a realizar análisis críticos del proceso de transición. En efecto, menos por la importancia del número cerrado, que por la de los sacudones sociales y políticos recientes, el corolario del pasado 5 de octubre es el signo de una indeclinable apertura del debate —dentro y fuera no solo de las fuerzas políticas emergentes, sino también de aquellas que participaron de la transición democrática—.

En este escenario de balances se ubica este número de Cuadernos de Coyuntura. Cumplidas veintidós ediciones y varias iniciativas que han propiciado encuentro y debate entre actores de la actual oposición, en este número especial se ha convocado a una serie de voces, dentro y fuera del Frente Amplio, para hablar de la transición y sus nudos. Tres décadas desde el plebiscito traen a la transición al presente para ir al pasado y luego a la práctica. En particular, para abordar lo heredado de este proceso que hoy favorece o dificulta la posibilidad de una alianza entre sectores que, a lo largo de estas décadas, no han tenido motivos suficientes para trabajar juntos.

Los marcos de la transición, lo codificado durante este proceso, es una forma de la política chilena actual, cuya vigencia y permanencia se juega, justamente, en la capacidad y disposición a analizar críticamente el pasado y el presente. Un elemento característico de esta etapa es la cancelación o inhabilitación de los dilemas irresueltos con este proceso, en muchos casos estos han sido expropiados

de la deliberación democrática al ser cedidos a la preeminencia de los “expertos” o se han visto cerrados por la lógica de los acuerdos. Los tabúes son: los silencios de la democratización política, la transformación del modelo de desarrollo, los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

La presente edición agradece la concurrencia de parlamentarios y autoridades políticas, figuras de la cultura y la academia, pertenecientes a diferentes sectores políticos. Ellos se han sumado a realizar balances críticos de la transición. Algo necesario en un ambiente de dispersión de las fuerzas de izquierda y progresistas, que ven lentamente cuajar en la región latinoamericana lo que parece ser un cambio de ciclo de imprevisibles consecuencias.

Son tiempos de balances. Pero de unos que permitan ir hilvanando acuerdos políticos. Unos que, en Chile, asuman que, en los contorneos de los nudos de la transición, que en el dilema hamletiano de la polaridad dictadura-democracia, que en la disputa de si la Concertación hizo más o menos de lo que permitía el contexto, el adversario parece moverse con más gracia y alcance que las fuerzas de cambio. Son balances necesarios, entonces, que, siendo reflexivos, estén atentos a los riesgos del ensimismamiento. Son tiempos de balance, sí, pero de balance hacia adentro y hacia afuera de la propia política. 🏠

Sebastián Caviedes

Director

Santiago, octubre de 2018

NEOLIBERALISMO Y CONSTRICCIÓN DE LA POLÍTICA

UN BALANCE POLÍTICO DE LA TRANSICIÓN

Carlos Ruiz

Sociólogo y Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile
Presidente de Fundación Nodo XXI

Camila Miranda

Egresada de Derecho de la Universidad de Chile
Directora de Fundación Nodo XXI

***E**n este artículo se propone un balance político de la transición chilena, como contribución para pensar la situación política actual. En primer lugar, se aborda el carácter del denominado pacto de la transición, que define los límites de la política y la democracia en el contexto de los gobiernos civiles. Desde allí, se abordan los ideologismos que rodean al proceso de transición y la deriva adoptada por el debate político sustantivo en el seno de la Concertación. Se propone, por último, reconstruir el estatuto de la política en la sociedad chilena, teniendo en cuenta la centralidad que este espacio tienen para la recuperación de la libertad humana, en tanto lugar donde deliberar racionalmente sobre el tipo de sociedad que queremos.*

Cumplidos treinta años del plebiscito de 1988, nuevamente el ánimo general abre la oportunidad para un balance de la historia reciente. En este caso, uno político, que permita, en retrospectiva, no solamente identificar las herencias dictatoriales superadas o profundizadas en la etapa democrática, sino, ante todo, lo que la transición hereda al presente, a la situación política actual, en momentos en que se desenvuelve un incipiente proceso de reacomodo de las fuerzas sociales y políticas en disputa.

Dicha cuenta de la transición, por otro lado, no puede sino ubicarse en la trayectoria de un período neoliberal que ya resulta ser el más largo en la historia contemporánea de Chile. Un estructural cambio social, político, económico y cultural, que alcanza con sus manifestaciones al conjunto de la región latinoamericana, por más que la experiencia chilena se alce como pionera en este contexto.

1. El pacto de la transición o la sociedad democrática posible

La dictadura chilena es la experiencia más refundacional de las que registra la historia reciente de América Latina. Bajo su égida, los cambios económicos y sociales que se impulsan desarticulan a los principales actores de la etapa anterior, condicionándose el panorama social chileno. Las clases y grupos sociales que portaran los proyectos históricos del Chile desarrollista, especialmente la clase obrera y los sectores medios ligados a la esfera de la industrialización sustitutiva, son barridos de escena. El comienzo de tal transformación se ubica en la desindustrialización que acarrea la irrupción neoliberal, la cual define tempranamente la “pérdida del peso estratégico de la clase obrera”¹ y desata en su lugar un crecimiento ininterrumpido de los trabajadores de los servicios, cuya tercerización no siempre responde a simples ocupaciones precarias de refugio. Parte del carácter de ese crecimiento es la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, implicando ello una segmentación del carácter de tales trabajos de servicios y, por tanto, valoraciones y precarizaciones alojadas a ello². Respecto a los sectores medios, el llamado “emprendimiento forzado”, como una falsa

1 Martínez, J. y Tironi, E. (1985). *Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación, 1970-1983*. Santiago: SUR Ediciones.

2 Vásconez Rodríguez, A. (2017, agosto). “Crecimiento económico y desigualdad de género: análisis de panel para cinco países de América Latina”. *Revista Cepal*, (122).

3 Ruiz, C. y Boccardo, G. (2014). *Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social*. Santiago: Ediciones El Desconcierto – Fundación Nodo XXI.

4 Ruiz, C. (2017). “Socialismo y libertad. Notas para repensar la izquierda”. En Zerán, F. (ed.). *Chile actual: crisis y debate desde las izquierdas*. Santiago: Lom Ediciones, pp. 133-162.

5 Para ahondar, ver Miranda, C., López, D., Ferretti, P., e Irani, A. (2018, agosto). El feminismo como posibilidad de ampliación democrática. *Coyuntura*, (21), pp. 21-32.

6 Lechner, N. (1988). *Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política*. Santiago: FCE.

7 Böeninger, E. (1997). *Democracia en Chile. Lecciones de gobernabilidad*. Santiago: Editorial Andrés Bello.

empresarialización inicial, prosigue al desmantelamiento del viejo Estado empresario y, en especial, a sus antiguos servicios sociales, lo que obliga a la migración de las viejas burocracias estatales hacia el mundo privado³.

La desarticulación política, por su parte, sustentada en la política de represión ejercida por el Estado sobre las cabezas políticas y sociales de la izquierda, produce un cisma en sus partidos, otorgando un liderazgo inédito y sin contrapesos a ciertas élites y franjas reducidas de políticos e intelectuales que asumen la tarea de construir la oposición al régimen y de negociar los términos de la transición pactada. Estos últimos son justificados mediante la elaboración de una teoría política de la transición, que viabiliza la vía de la negociación con el régimen a partir del reconocimiento del marco constitucional establecido, completando un relato sobre el cambio social y político que predomina en los años siguientes⁴.

Es esta doble desarticulación social y política de los actores subalternos —incluidas las tradicionales capas medias y sectores obreros, y otras actorías que cumplieron papeles clave en la defensa de la democracia en dictadura, como los movimientos de mujeres⁵—, fraguada en dictadura y prolongada en democracia, la que singulariza la transición chilena como una en la que no existe una movilización anclada en sectores políticos movilizados. Y es que, heridas de muerte las bases de sustentación del ciclo anterior, se abre en el horizonte, ya en la misma negociación con que se supera la experiencia autoritaria, una utopía elitista de política sin sociedad que hará escuela en las décadas siguientes.

La “política de los acuerdos”, en que fluyen los consensos entre las nuevas élites civiles, los grupos empresariales y las garantías otorgadas al repliegue militar, caracterizan una transición marcadamente elitista y eminentemente procedimental, en la cual se proyecta hacia adelante una brecha entre lo social y lo político⁶. Respecto a esto último, se reitera ante las demandas sociales la necesidad de preservar el crecimiento económico y la estabilidad de la transición⁷. Una idea que hace abstracción del carácter y los efectos sociales diferenciados de tal orden de cosas, sustrayendo muchas funciones estatales de la política abierta, presentadas como “técnicas” y “apolíticas”.

En los años noventa avanza una “autonomización de la política”, efectiva en tanto se mantiene la desarticulación antes mencionada, que permite, a diferencia de otros países de la región, que los cambios económicos y sociales no constituyan fuentes de inestabilidad en la transición⁸. Se concibe el fortalecimiento del sistema de partidos como autonomización de las fuerzas sociales, sustrayéndose de los partidos políticos cada vez más, y como consecuencia de la propia profundización del modelo económico heredado, la promoción de intereses distintos a los del empresariado, que se convierte en el único grupo de presión con capacidad de proyectar la defensa de los suyos a través de los partidos o, en su defecto, sobrepasar la mediación de estos. La clientelización de las bases sociales de los partidos, por otro lado, una vez en el gobierno, agudiza la pérdida de sentido de toda militancia, favoreciendo aún más el divorcio entre política y sociedad. Con ello se debilita la capacidad representativa de la política, que se reduce a administrar los consensos impuestos.

Tal deterioro potencia la capacidad de determinación de “poderes extrainstitucionales” (empresariado, medios de comunicación, Iglesia Católica, Fuerzas Armadas y tecnocracias) sobre las políticas económicas, la dirección cultural y en el dominio de los espacios de base de la sociedad. Esto tiene que ver, en buena medida, con el hecho de que el pacto de la transición deviene proceso de renovación de las élites en el poder, pues la élite concertacionista se integra con la empresarial y militar, en un curso que luego asume la conveniencia de prescindir de Pinochet⁹. Al consolidarse el bicoalicialismo una vez avanzada la política de los acuerdos entre gobierno y oposición, la tensión es con la cúpula castrense. En un Estado fundado en un consenso elitario, además, éste se abstiene de regular muchos ámbitos de las relaciones sociales, en especial el procesamiento de los conflictos sociales, profundizando la brecha entre la institucionalidad democrática y la política con la sociedad.

Buena parte de la desarticulación se reproduce ligada a las fuerzas del trabajo. Al permanecer lo esencial del Plan Laboral de 1979, en los años noventa apenas se rearticula el sindicalismo histórico. La privatización y tercerización de la economía, la desconcentración productiva y la flexibilización de las condiciones generales del trabajo, propician que la resistencia se

8 Ruiz, C. (2015). *De nuevo la sociedad*. Santiago: Lom Ediciones.

9 Otano, R. (2005). *Nueva crónica de la transición*. Santiago: Lom Ediciones.

diluya ante el embate empresarial sobre los servicios sociales y los recursos naturales. Internamente, un sindicalismo burocratizado al extremo complota para que esto se mantenga, por cuanto renuncia a construir nuevas bases de sustentación entre los nuevos asalariados, ajenos a las formas de sociabilidad tradicionales¹⁰.

Respecto al orden político y la situación de los militares, una idea de soberanía nacional y no popular justifica la permanencia de “enclaves autoritarios” como los senadores designados, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Seguridad Nacional, el sistema electoral binominal, la autonomía y el papel de garantes de la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas¹¹. Tal situación, junto a las acciones de amedrentamiento que llevan adelante los militares, restringe la resolución del conflicto que permanece por las violaciones a los derechos humanos, desplazándolo de un gobierno a otro. Y es que, en la negociación del pacto transicional, se fragua una impunidad de las élites, que luego se proyecta hacia adelante en la opacidad de la política y de la justicia.

En el ámbito económico e institucional, se impone un consenso sobre las líneas económicas que indicaban la mantención de la economía abierta y desregulada, equilibrios macroeconómicos rígidos que aseguren la estabilidad financiera, el gasto social controlado y la aceptación de las privatizaciones heredadas. La institucionalidad se define por la debilidad reguladora de la política y por la mantención de un Estado “subsidiario” que renuncia al fomento productivo. En tales circunstancias, los aspectos fundamentales del modelo económico no sólo continúan, sino que se profundizan. De este modo, en los años noventa, a un mismo tiempo disminuye la pobreza y crece la desigualdad, poniendo a Chile a la cabeza de los países socialmente más polares no sólo de América Latina, sino del mundo, en pleno proceso de crecimiento económico. La concentración económica aumenta notablemente, y las dimensiones de los grandes grupos económicos alcanzan una dimensión que, por primera vez, les permite una agresiva expansión por el subcontinente.

Pero, además, bajo los cimientos de la refundación capitalista, emerge un “capitalismo de servicios públicos” en base a profundizar la ola privatizadora iniciada en la etapa autoritaria¹². Así,

10 Ruiz, C. y Boccardo, G. (2014). *Op. Cit.*

11 Garretón, M. A. (2000). *La sociedad en que vivi(re)mos*. Santiago: Lom Ediciones.

12 Ruiz, C. (2015). *Op. Cit.*

a la privatización de las pensiones, que origina masas de capital capaces de dinamizar en poco tiempo gran parte del auge de la especulación financiera, se suma una entrada más gradual pero ininterrumpida de la esfera mercantil en la salud y la educación.

En fin, la transición define el tipo de sociedad democrática posible. Una en la que, si bien se obtienen garantías mínimas para la vida, en tanto los órganos represivos ya no pueden actuar de modo tan directo y brutal, también se impone un tipo de Estado que mantiene los moldes de la reestructuración sufrida a sus viejas orientaciones desarrollistas y que anima un estricto régimen de prescindencia estatal en materia de regulación de las relaciones sociales. Un régimen, este último, que fomenta la despolitización de las relaciones ubicadas en la base de la sociedad, en virtud de un Estado que no promueve formas de consenso y pacto social, sino que proyecta la expulsión de dichos sectores de los procesos de construcción que lo rodean.

2. Los binarismos transicionales y la restricción del debate

La transición aparece como una historia de movilizaciones que cristaliza en el No, la opción que pone fin a la intención del dictador de prolongar su permanencia en el poder, pero no al orden social heredado. Pero, más allá de la propaganda —que a menudo recupera el mero hito del plebiscito y no el proceso en el que se enmarca, mostrando otro ejemplo del divorcio entre política y sociedad—, el Sí y el No también fue asimilado, como derivado de la polaridad dictadura versus democracia, al enfrentamiento entre mercado y Estado.

La vulgata de un “Estado mínimo” como definición del neoliberalismo, que tan a menudo atizó el debate político e intelectual al interior de la izquierda chilena, sirve como marco ideológico de lo defendido como un pretendido pensamiento socialdemócrata enfrentado a un supuesto liberalismo desbocado. La realidad, sin embargo, diría otra cosa. Y es que los nichos de acumulación regulada, sostenidos en subsidios estatales, que impulsan el extraordinario auge económico de los años noventa y de cuyas espectaculares tasas de crecimiento quedan exclui-

das inmensas capas de la sociedad, sentando las bases de un malestar que crece y se proyecta al nuevo siglo, evidencian la dependencia estatal del neoliberalismo local. Así, no es cierto que a más Estado haya menos mercado. No hay una minimización del Estado, aunque sí una alta concentración económica, que genera una élite financiera que sesga la política estatal, impidiendo un desarrollo económico más inclusivo¹³.

En términos generales, el énfasis en las libertades individuales y la cultura marcan el discurso de la Concertación en la transición, contraponiendo la experiencia autoritaria, e imponiendo tales temas por sobre un debate referido al modelo socioeconómico. La contraposición autoritarismo-democracia define el horizonte progresista posible, reduciendo la dimensión social a la superación de la pobreza y desigualdades a través de una acción estatal focalizada y no por medio de grandes reformas. En la medida en que se supone que las tareas de la transición impiden un debate de la política democrática sobre el modelo económico y social, la continuidad de este por la acción gubernamental se naturaliza como única vía posible para garantizar la democratización política. De este modo, se contrapone democratización política a democratización social, ocultándose el carácter social restrictivo de la primera¹⁴.

Tal horizonte del debate y del progresismo —de su ausencia o constricción— se alteran recién a fines de los noventa con la “crisis asiática” y la caída de la votación parlamentaria en 1997. El mensaje conciliador que apuntaba a una sociedad cansada de décadas de conflicto y sin ánimos de movilizarse, entra en crisis. En los años noventa, el principal debate de la Concertación se centra en sus logros y sus límites, pero menos atención recibe su carácter como coalición, sus relaciones internas y con la sociedad. Pero estos últimos problemas son los que desatan un sacudón en su seno a fines del año 2002: el desplome del sueño elitista de una política sin sociedad. Las discusiones sólo se hacen públicas a partir de 1998. Tal era el límite de la deliberación pública y de la cultura política de esos años. En la Concertación y la derecha reina la idea de que aún se estaba en transición, lo que impide el debate con el pretexto de que alteraría su estabilidad. Tras las elecciones parlamentarias de

13 Muñoz, O. (2007). *El modelo económico de la Concertación: 1990-2005. ¿Reformas o cambio?*. Santiago: Editorial Catalonia.

14 Ruiz, C. (2015). *Op. Cit.*

1997, sectores de la Concertación alegan un descontento en franjas de la sociedad con la política, y que, dada la continuidad del modelo económico, sus resultados sociales no guardan relación con el éxito económico.

Aunque con matices, en el debate entre autocomplacientes y autoflagelantes todos creen en la proyección de la Concertación, como única alternativa progresista y de gobierno. Ninguno pone en cuestión un horizonte político, no hay referencias a una reformulación de su proyecto. Las recíprocas y ligeras calificaciones, los realineamientos y las urgencias electorales de la contienda presidencial del año siguiente, merman la hondura y continuidad del debate. El carácter de la coalición se sella, en la medida que se impone el control burocrático en la distribución de las oportunidades y recursos. A inicios del nuevo milenio vuelve el debate. Ahora, más allá de la evaluación de la gestión gubernamental, en este se aborda la naturaleza del proyecto de la coalición. Ocurre, sin embargo, que el control burocrático y la distribución clientelar de oportunidades se impone como cultura política posible, derivada de las restricciones de una práctica gubernamental administrativa del modelo heredado, hundiendo la imaginación política¹⁵.

El clima se agrava por irregularidades estatales, los casos de coimas y sobresueldos de altos funcionarios y delitos en el sector privado. La presión de la derecha lleva a una salida pactada como “modernización del Estado” de tipo “anticorrupción”, que desplaza las reformas políticas y ata la dirección económica a los intereses empresariales, al reducirse a términos de eficiencia y transparencia¹⁶. El ideal de “Alta Dirección Pública” abre las altas esferas estatales a tecnócratas en detrimento de los cuadros políticos, fluyendo la carrera por estos puestos más en las grandes empresas que en los partidos, lo que agudiza el control empresarial del Estado y la debilidad de los partidos y el sistema de representación. El Estado ahonda su distanciamiento de la sociedad. Se plantea el colapso de la coalición y esto enfrenta al gobierno y sus partidos; se alega la falta de un proyecto político y socioeconómico, así como que la institucionalidad condiciona una restricción democrática y un modelo neoliberal de orgánica relación¹⁷.

15 Ruiz, C. (2018). *La política en el neoliberalismo. Experiencias latinoamericanas*. Santiago: Lom ediciones (En prensa).

16 Garretón, M. A. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*. Santiago: Editorial Arcis-Clacso-El Desconcierto.

17 Ruiz, C. (2018). *Op. Cit.*

La ausencia de normas y recursos estatales permite la gran intromisión empresarial en la vida pública y política por la vía de los recursos económicos, en un cuadro que es difícilmente atribuible sólo a los términos del pacto de la transición, dada la madurez de la experiencia democrática. Es la colonización empresarial de la política y del Estado que alienta un divorcio entre Estado y sociedad, a la vez que una crisis general de legitimación de la política.

3. Hacia la reconstrucción de la polis en la sociedad chilena

Los gobiernos democráticos heredan un modelo socioeconómico consolidado, una sociedad desarticulada y un modelo político fijado en la Constitución de 1980, que evita cambios tanto por un sistema electoral como por mecanismos institucionales. El proyecto neoliberal se extiende mucho más allá de la economía, alcanzando todas las esferas de la vida social. El marco constitucional proyecta un orden político de base civil con poder de veto militar. Se trata, en definitiva, de una refundación económica, política, social y cultural de la sociedad chilena.

No obstante, en la misma medida en que Chile se muestra como un laboratorio de extrema hegemonía mercantil, la aparición de nuevos conflictos sociales y nuevas polaridades que desbordan el sistema político fraguado en la transición, hacen explotar los códigos culturales con que la transformación neoliberal y el propio conservadurismo de ésta venían justificándose. Y es que, pese a que la ofensiva mercantil siempre se impulsó en nombre de la libertad, la paradoja es que en nombre de ella las y los individuos pierden soberanía sobre sus propias vidas, abriendo una posibilidad de recuperación, para la izquierda y el progresismo, de las banderas de la libertad desde hace mucho en manos de la derecha¹⁸.

El neoliberalismo restringe la posibilidad de intervención de la política, no sólo del Estado, sino de la política en general y de la sociedad, a través de la política, sobre la economía. La desaparición de este estatuto decisivo de la política en la sociedad

¹⁸ Ruiz, C. (2017). "Incongruencias en los usos de los idearios de libertad e igualdad". *Estudios Públicos*, (174), pp. 169-197.

es el gran cambio neoliberal, teniendo en cuenta que la política y su ensanchamiento eran la mayor fuente de modernidad en América Latina. La política restringida por la razón tecnocrática, desprovista de intereses sociales particulares, es el nuevo autoritarismo con que la égida neoliberal reduce lo público, en su acepción más pura, más allá de lo estatal¹⁹. Volver a expandir la política es una tarea pendiente, en tanto todas estas restricciones han expropiado funciones de la deliberación pública, de la política, en particular, sobre la esfera mercantil.

Ese dilema es uno que la transición no enfrentó, toda vez que se evitó la reconstrucción de la polis desestructurada por casi dos décadas de autoritarismo. Por el contrario, lo que se promovió fue la invasión tecnocrática y la elitización de la política, atizando una lejanía y desidentificación del nuevo Chile con un ámbito que, por la fuerza de este desplazamiento, se volvió cada vez más ajeno para la reproducción de la vida cotidiana, dejada a las vicisitudes de un mercado. Uno, por lo demás, escasamente competitivo y, por lo mismo, generalmente muy concentrado.

Ahora bien, lentamente, y sobre todo ante la polarización del actual cuadro político —con un gobierno más proclive a impulsar contrarreformas a las no tan profundas reformas del gobierno anterior—, el debate sobre tal reconstrucción se instala en las fuerzas de oposición como el imperativo de articular nuevos horizontes. Las fuerzas que vienen trabajando desde la transición ya comienzan a debatir. Las fuerzas nuevas, que se constituyen al alero de los últimos ciclos de movilización social, se ven impelidas a este tipo de reorganización al producirse esta polarización.

19 Ruiz, C. (2018). *Op. Cit.*

DESARROLLO ECONÓMICO Y DESIGUALDAD DURANTE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN CHILE (1990-2009)

JAVIER RODRÍGUEZ WEBER

Doctor en Historia Económica y docente del Programa de Historia Económica y Social de la Universidad La República (Uruguay)

El presente artículo evalúa en qué medida las condiciones materiales de los chilenos y chilenas han variado durante la transición a la democracia (1990-2009). Lo hace analizando no sólo la magnitud del crecimiento económico, sino también su distribución. De este modo, se tratan las dos dimensiones más importantes del desarrollo económico: las brechas que separan a las y los chilenos entre sí y las que separan a estos de quienes viven en sociedades más prósperas. Finalmente, se desarrolla una perspectiva integrada de ambas dimensiones, distinguiendo tres hechos básicos que invitan a una evaluación crítica del impacto del crecimiento económico promedio en distintos sectores de la sociedad chilena durante el período estudiado.

1. Introducción

Vivir en democracia significa no sólo que tus derechos no serán vulnerados, sino que podrás ejercerlos. Dado que el ejercicio de los derechos humanos depende, en parte, de las condiciones materiales de existencia, una democracia puede evaluarse en función del acceso que los miembros de la sociedad tienen a los recursos materiales necesarios¹. Desde el punto de vista de las capacidades, ello puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿acceden los miembros de una sociedad dada a los recursos necesarios para desarrollar libremente su proyecto vital?

Cualquier respuesta a esta pregunta requiere adoptar una perspectiva comparada. Cuáles son los recursos necesarios refiere siempre a una dimensión relativa. Por ejemplo, resulta absurdo responder negativamente porque hay enfermedades incurables que impiden a las personas vivir las vidas que desean. Sin embargo, a partir del momento de que existe un tratamiento que permitiría remover ese obstáculo a la libertad individual, la respuesta negativa cobra sentido. La muerte por cólera podía ser considerada una tragedia inevitable hace 200 años, pero hoy no. En la medida de que existe tratamiento y hay personas que acceden a él, no poder hacerlo es una injusticia inaceptable. De este modo, llegamos a la idea de desigualdad.

Así como desde el punto de vista institucional la democracia implica igualdad de derechos políticos entre los ciudadanos, desde el punto de vista económico supone igual acceso a los recursos materiales necesarios para desarrollar nuestra vida en libertad. Reconocer lo segundo como una derivación lógica de lo primero y, por tanto, combatir las desigualdades económico-sociales, además de las políticas, constituye, quizá, la seña de identidad determinante de quienes nos consideramos republicanos de izquierda.

A partir de estos criterios, el presente artículo analiza el período de la transición a la democracia en Chile, entendiendo por tal el ciclo de gobiernos que terminó en el año 2009². Nuestro objetivo es evaluar en qué medida durante este período se “democratizaron” las condiciones materiales necesarias para sustentar los proyectos de vida de chilenas y chilenos. Aunque

1 Naturalmente que este no es el único, ni tal vez siquiera el más importante de los factores a tener en cuenta.

2 El análisis que sigue se basa, en parte, en Rodríguez Weber, J. (2018). *Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009): historia de su economía política*. Santiago: LOM Ediciones (2da ed.).

no se trate exactamente de lo mismo, analizaremos la democratización económica como la reducción de las desigualdades en el campo de la distribución del ingreso. Lo haremos atendiendo a dos de sus dimensiones más importantes: la desigualdad que separa a las y los chilenos entre sí y de quienes viven en las sociedades más prósperas. La primera dimensión hace referencia a la distinción entre países desarrollados o centrales y subdesarrollados, en vías de desarrollo o periféricos³. La segunda trata de lo que habitualmente entendemos por desigualdad de ingreso: las diferencias que hay al interior de una sociedad entre los distintos grupos y/o personas que la componen. Finalmente, abordamos una perspectiva integrada de ambas dimensiones. Al abrir la “caja negra” que supone todo promedio, podremos elaborar un análisis más fino sobre cómo ha impactado el crecimiento económico en distintos sectores de la sociedad chilena durante el período de transición democrática⁴.

2. Desigualdad internacional e interior: algunos hechos básicos

Desde el punto de vista global, las diferencias de ingreso que separan a las sociedades pobres de las ricas constituyen la desigualdad más importante. Como cualquiera puede imaginar, no es lo mismo ser pobre en Suecia que en Brasil o en el Congo. Así, dos tercios de la desigualdad global se “explica” (en el sentido estadístico) por el país en que vivimos, y un tercio por el lugar que ocupamos en la distribución del ingreso al interior de nuestra sociedad⁵. En otras palabras, las diferencias en el nivel de ingreso entre países son un componente muy importante de la desigualdad global, y tasas de crecimiento más altas por parte de los más pobres es lo que se requiere para reducirlas.

Los datos incluidos en la Tabla 1 permiten apreciar que, desde el punto de vista de la desigualdad internacional, el balance de los primeros veinte años de democracia es positivo. Chile tocó fondo durante el período dictatorial. En 1990, al recuperar la institucionalidad, el PIB per cápita del país era apenas un quinto del de los Estados Unidos. Veinte años antes se ubi-

3 Aunque el título que se le asigne no es neutral, aquí haremos abstracción de este problema, utilizando cualquier nombre que sirva al objetivo más importante del lenguaje: poder entendernos.

4 La desigualdad económica al interior de una sociedad, cuando es elevada como en Chile, genera una serie de efectos perniciosos en distintos campos, como la movilidad social o la calidad de la democracia, entre otros. Que estos u otros aspectos del problema no sean abordados en este artículo no se debe a que los consideremos menos importantes que los que sí tratamos.

5 Milanovic, B. (2017). *Desigualdad mundial: un nuevo enfoque para la era de la globalización*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

caba entre un cuarto y un tercio. En 1913, el último año del *boom* salitrero, era algo menos de la mitad. Pero en el período posterior Chile revirtió la tendencia, observada durante todo el “siglo XX corto”. Desde 1990, el ingreso medio relativo pasó del 21% al 40%, alcanzando en el presente un nivel cercano al que existía hacia 1929.

PIB per cápita relativo a Estados Unidos							
	Chile	Argentina	Uruguay	China	Alemania	Francia	Gran Bretaña
1913	45%	80%	53%	11%	69%	64%	79%
1929	40%	71%	43%	9%	43%	54%	70%
1970	28%	51%	33%	5%	69%	70%	66%
1980	24%	49%	33%	6%	74%	77%	70%
1990	21%	32%	25%	7%	68%	66%	65%
2000	24%	33%	24%	9%	74%	69%	75%
2010	37%	38%	32%	19%	84%	73%	71%
2016	40%	35%	38%	23%	88%	73%	74%

Fuente: Calculado a partir de Maddison Project Database, version 2018 (hoja cgdppc).

El alejamiento de Chile, pero también de Argentina y Uruguay, formó parte de una tendencia al rezago general en los países periféricos: la mayor parte del siglo XX fue un período de incremento de la desigualdad internacional⁶. Más recientemente parece haber una reversión. En los últimos años, la desigualdad global del ingreso ha tendido a disminuir como consecuencia del acercamiento en los niveles de ingreso medio de países pobres y muy poblados, como China y, en menor medida, India⁷. La misma evolución se observa, luego del año 2000, en Argentina y Uruguay. El mérito del Chile democrático refiere, principalmente, al haber iniciado antes y llegado más lejos con la recuperación.

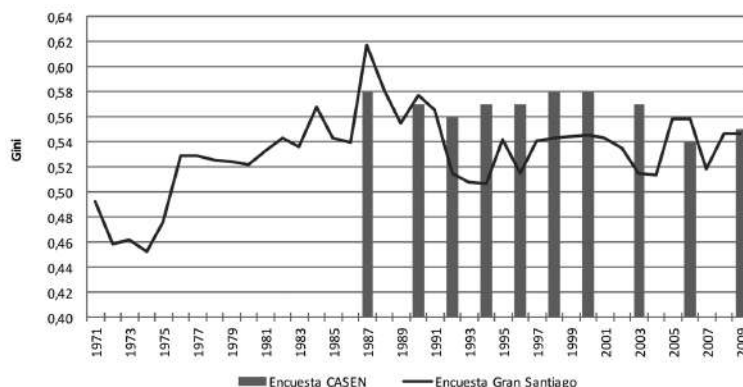
Si, por otra parte, tornamos la mirada hacia la desigualdad al interior de la sociedad chilena, el panorama es bastante menos alentador. La situación puede resumirse en pocas palabras: la dictadura hizo de Chile uno de los países más desiguales del mundo y luego de décadas de democracia esta situación permanece, en lo fundamental, incambiada (Gráfico 1). Como resultado, hacia 2012, Chile se ubicaba en el 15% de países con mayor desigualdad (Nº 117 de 134) (Gráfico 2).

6 Williamson, J. G. (2011). *Trade and Poverty*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

7 Milanovic (2017). Op.Cit.

Gráfico 1

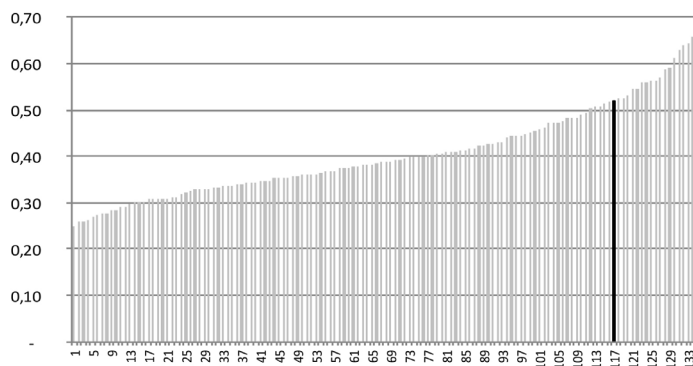
Distribución personal del ingreso en Chile según distintas fuentes (1971-2009)



Fuentes y comentarios: La serie 1971-2009 corresponde a la distribución del ingreso personal y se calculó a partir de la encuesta de ocupación en el Gran Santiago. La encuesta CASEN tiene cobertura nacional y corresponde a datos oficiales sobre distribución del ingreso autónomo por hogares, es decir, antes de impuestos y transferencias.

Gráfico 2

Distribución del Ingreso en 134 países (circa 2012). Índice de Gini



Fuente: PNUD. (2013). *Informe sobre desarrollo humano 2013. El ascenso del Sur: el progreso humano en un mundo diverso*. New York, NY: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Anexo estadístico, Cuadro 3.

3. Crecimiento y desigualdad: efectos combinados

Contrariamente a un mito muy extendido, el desempeño económico del régimen de Pinochet fue, a lo sumo, mediocre. Durante la dictadura la inversión fue escasa y el crecimiento siguió siendo pobre, además de volátil —algo malo de por sí⁸. El país transitó por dos graves crisis en apenas siete años. Como consecuencia, se profundizó el rezago relativo (Tabla 1). Es un mérito importante del período democrático haber revertido esta situación (Tabla 3).

Tabla 3

Crecimiento, volatilidad e inversión				
	Tasa de crecimiento de PIBpc	Desviación Standard de la tasa de crecimiento	Coefficiente de Variación de la tasa de crecimiento	Formación bruta de capital como % del PIB (promedio)
1973-1989	1,4%	7%	5,98	16%
1989-2010	3,7%	3%	0,79	24%
Fuente: Rodríguez Weber. (2018). Op. Cit., cuadro 34.				

La aceleración producida en el período de transición democrática no sólo permitió reducir la brecha de ingreso medio respecto a los países desarrollados, también fue el mecanismo clave para bajar la pobreza de 39% a 15% entre 1990 y 2009. Una reducción de esa magnitud es un logro no menor, pero, lamentablemente, tomó más tiempo del necesario. El ritmo de avance hubiera sido mayor con una desigualdad menor o decreciente.

El impacto del crecimiento en la pobreza está mediado por la distribución del ingreso: cuanto más desigual es una sociedad, se requiere más crecimiento para reducirla. Si el Gini es de 0,5, como en Chile, entonces un 1% de crecimiento bajará

8 Entre 1973 y 1989 el PIB per cápita creció a una tasa media anual del 1,4% en términos reales. Entre 1939 y 1973 fue del 1,3%. Y esta es la perspectiva más favorable para la dictadura. Si tomamos a la economía en su conjunto, el crecimiento fue inferior entre 1973 y 1989 que en el período anterior: esos años el PIB real se expandió al 3,1%; entre 1939 y 1973 lo había hecho al 3,4%. Díaz, J., Lüders, R., & Wagner, G. (2016). *La República en cifras*. Santiago: Ediciones UC..

9 De Ferranti, D. M., Ferreira, F. H. G., Perry, G. E., y Walton, M. (2004). *Inequality in Latin America: Breaking with History?* Washington, DC: The World Bank.

10 Amarante, V., Colafranceschi, M., y Vigorito, A. (2011). *Uruguay's Income Inequality and Political Regimes During 1981-2010*. Helsinki: UNU-WIDER.

11 En esos ocho años los uruguayos con ingresos por debajo de la línea de pobreza pasaron de 40% a 13%: Instituto Nacional de Estadística, Uruguay. (2013). *Estimación de la pobreza por el método de ingreso. Año 2012*. Montevideo: Instituto Nacional de Estadística. Veinte años necesitó Chile para lograr una caída parecida. El ritmo de crecimiento del ingreso del país atlántico fue cercano al 5%, similar al de Chile en los años noventa.

12 Ver fuentes de Gráfico 3.

13 Según datos de SEDLAC, la situación descrita se mantiene en el presente (Leopoldo Tornarolli, comunicación personal).

la pobreza aproximadamente en 1,4%. Pero si la desigualdad es de 0,4, entonces el mismo crecimiento la reducirá en algo más del 2%⁹. Si, como en Uruguay entre 2004 y 2012, el crecimiento se combina con una caída de la desigualdad —allí el índice de Gini pasó de 0,46 a 0,40¹⁰—, la reducción de la pobreza es más rápida¹¹. Sucede que, por simple aritmética, crecer con reducción de la desigualdad significa que el ingreso de las personas pobres aumenta a una tasa superior al promedio. Para esos sectores, mejorar la distribución equivale a mayor crecimiento.

La comparación con Uruguay nos permite apreciar el efecto de la desigualdad sobre el nivel de ingreso medio por deciles de la población. En 2011, el Ingreso Nacional Bruto per cápita era un 12% superior en Chile, pero el índice de Gini también era 0,08 más alto¹². Si combinamos ambos aspectos se observa que ese año:

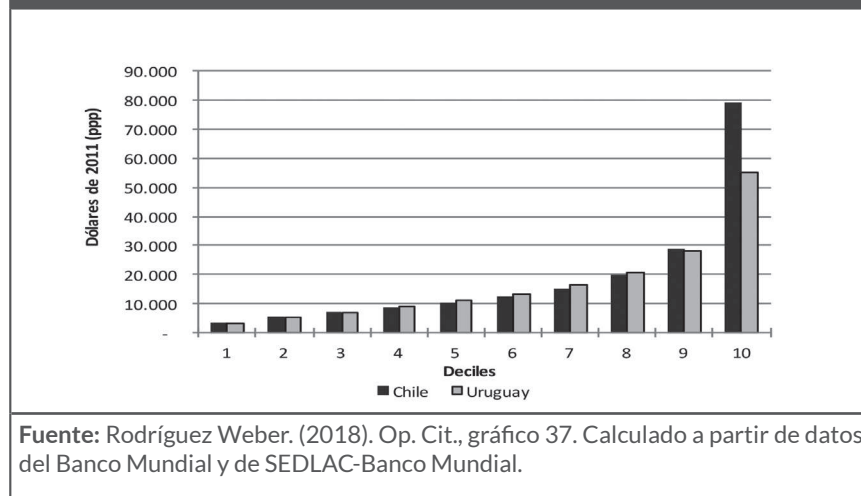
a) Los chilenos de menores ingresos tenían un ingreso similar a sus pares de Uruguay. Para ellos era como si no vivieran en una sociedad 12% más rica.

b) El 50% de los chilenos de los deciles intermedios (4 a 8) tenían un ingreso *inferior* al de sus pares de Uruguay. Su ingreso no era el de una sociedad más rica, sino el de una más pobre.

c) Los chilenos más ricos disfrutaban de un ingreso muy superior al de sus pares de Uruguay —en el entorno de un 40% más alto. Se trata de una magnitud mucho mayor a la que sería de esperar en función del 12% de diferencia en el ingreso medio. Ellos no sólo se beneficiaban de vivir en una sociedad más rica, tanto o más importante era vivir en una más desigual¹³.

Gráfico 3

Ingreso anual por deciles en Chile y Uruguay en 2011. Dólares PPA



Pasamos ahora al análisis de la distribución mundial del ingreso, un abordaje que nos permite tener en cuenta las dos dimensiones que venimos analizando: la desigualdad interna y externa¹⁴.

El crecimiento económico sostenido permitió a los chilenos ascender en la distribución global del ingreso. En 1988 el 10% más pobre tenía un ingreso medio tal que los ubicaba en el onceavo percentil de la distribución global (considerando a la población de todo el mundo como si fuera la de un único país). Es decir, los pobres de Chile eran tan pobres como los más pobres del mundo. En 2011, la situación era bastante diferente. Su ingreso medio los ubicaba en el percentil 38 a nivel global. También los chilenos de los demás deciles avanzaron en ese período. La mayoría lo hizo entre 4 y 6 percentiles¹⁵. Sin embargo, y al igual que lo ocurrido con la pobreza, la mejora se vio limitada por la elevada desigualdad interna. Al menos para la gran mayoría.

El Gráfico 4 muestra el lugar que cada percentil de chilenos y uruguayos ocupaba en la distribución mundial del ingreso en el año 2011. El mismo proyecta una imagen incluso peor a la que surge de la comparación realizada en el Gráfico 3¹⁶. Al identi-

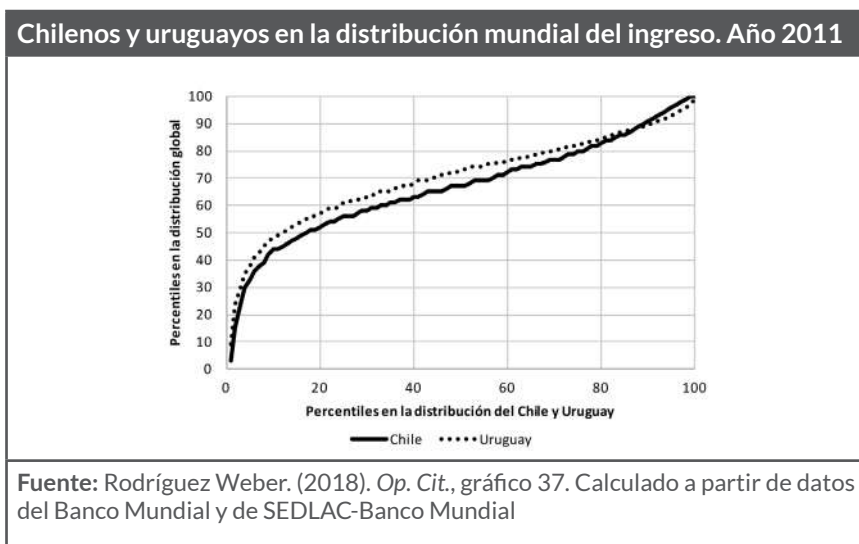
¹⁴ Milanovic (2017), *op. cit.*

¹⁵ La excepción fue el segundo decil, que avanzó 10 percentiles en la distribución global (de 28 a 38); más que el resto, pero no tanto como el primero. Ver fuente del Gráfico 4.

¹⁶ Una diferencia menor que puede deberse a razones metodológicas.

ficar en qué lugar de la distribución mundial se ubican los ciudadanos de cada país en función de sus ingresos, se observa que los primeros 88 percentiles de chilenos, es decir, todos a excepción del 12% de mayores ingresos, están por debajo de sus pares de Uruguay. De nuevo: sólo el 10% superior goza de los beneficios de vivir en una sociedad más rica. De hecho, la elevada desigualdad del país potencia en mucho esta ventaja.

Gráfico 4



4. Comentarios finales

Al analizar el período de la transición democrática según el comportamiento de las dos variables fundamentales del desarrollo económico, la desigualdad internacional —determinada por el crecimiento económico— y la interna —resultado de cómo se distribuye dicho crecimiento entre los miembros de una comunidad—, la evidencia disponible arroja tres hechos básicos.

El primero es que, a partir de 1990 y luego de décadas de rezago relativo creciente, la economía chilena fue capaz de elevar la

tasa de crecimiento a un ritmo tal que le permitió acortar la brecha con los países centrales, en particular con los Estados Unidos. Ello tuvo un fuerte impacto en el ingreso medio de los chilenos y permitió una reducción sustantiva de la pobreza.

El segundo es que, en términos de distribución del ingreso, y a diferencia de lo ocurrido con el crecimiento y la pobreza, el período posterior a 1990 no trajo un cambio de tendencia. La dictadura hizo de Chile un país muy desigual. Más allá de variaciones pequeñas, lo seguía siendo veinte años después.

Finalmente, el tercer hecho básico surge de la combinación de los dos anteriores. Para la gran mayoría de chilenos la elevada desigualdad redujo el impacto positivo del crecimiento sobre sus ingresos. Para una minoría, por el contrario, lo multiplicó. Como consecuencia, y a pesar de vivir en una sociedad que hacia 2011 era, en promedio, 12% más rica que la uruguaya, los primeros 88 percentiles de chilenos y chilenas se ubicaban por debajo de sus pares de Uruguay en la distribución global. Por el contrario, los sectores de la cúspide tenían un ingreso muy superior al que habría cabido esperar en función de la diferencia media. Es que la desigualdad no es buena o mala en sí misma: es mala para muchos y buena para algunos. 



LA CULTURA EN LA TRANSICIÓN: LA EFICIENTE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA LÓGICA

Feria Chaco en Estación Mapocho
Fuente: estoy.cl

Óscar Contardo

Periodista de la Universidad de Chile. Escritor y columnista
en diversos medios de comunicación

***S**e indaga en las transformaciones sufridas por la vida cultural y artística en la transición, reconociendo tanto las lógicas y espacios heredados de la dictadura como las nuevas concepciones y codificaciones que, sobre la institucionalidad cultural, emergen con los gobiernos civiles. Este balance sitúa las preguntas que deja abiertas la relación entre política y cultura constituida durante la etapa democrática.*

En 1992 la Universidad de Chile cumplía 150 años desde su fundación. Era el primer aniversario redondo —sesquicentenario— desde el retorno a la democracia. Era también mi primer año de universidad. En el papel, aquella fecha debía ser un acontecimiento alegre para mi generación, los mechones de los 90: los tiempos oscuros en que la universidad había sido desmembrada y sofocada, habían terminado. El aniversario celebrado con un acto en la Plaza de la Constitución, en el corazón de la República, podía haber sido la señal de que las cosas volverían a su sitio tarde o temprano. A la larga no fue así. El fin de la dictadura no significaría que la universidad recobraría el lugar que tuvo hasta antes del Golpe, cuando era una institución de alcance nacional, con sedes a lo largo del país y funcionaba en los hechos, como una suerte de ministerio de cultura: la Universidad de Chile había contribuido a tejer la trama cultural del siglo XX con revistas, editoriales, escuelas de verano, salones de arte y un pedagógico en donde se formaron gran parte de los escritores e intelectuales que marcaron la historia a partir de los años cuarenta, la mayor parte de ellos provenientes de escuelas y liceos públicos. El escenario de los noventa era totalmente distinto.

Para la fecha de aquella celebración la educación pública estaba devastada y no dejaría de estarlo. Aun más, la democracia contribuiría a segmentar por ingresos la enseñanza. El sistema universitario también había cambiado, ampliando la cobertura a través de los planteles privados orientados cada vez más a los sectores medios; la clase alta, por su parte, comenzaría a preferir cada vez más las instituciones religiosas privadas para cursar sus estudios superiores. La educación y la cultura como punto de encuentro entre ciudadanos de distinto origen social tendería a desvanecerse. Los lugares de encuentro tenderían a extinguirse o a desplazarse hacia espacios temporales, esporádicos.

Durante la transición, la Universidad de Chile se sostendría en su prestigio, pero comenzaría a ser considerada persistentemente como una más entre muchas, aunque con una diferencia: frente a la opinión pública aparecería como un lugar de huelgas, tomas, paros y conflictos, lo que resulta atemorizante en una

cultura que apreciaría con mayor vehemencia la eficiencia y la competencia como valores primordiales, mucho más apreciados que la crítica. En suma, la estructura que había formado la vida cultural chilena durante el primer tercio del siglo XX ya no existía más. Había sido intervenida y su sentido alterado. La dictadura había concluido, sin embargo, sus efectos perdurarían no sólo como un trauma que se hace presente de tanto en tanto, sino como una reorientación de las lógicas y los espacios. Las instituciones culturales anteriores al Golpe no recuperaron su rol. Para la educación y la cultura —dos ámbitos estrechamente vinculados— el régimen no fue sencillamente un paréntesis que se cerró en 1990, sino un sismo que alteró el paisaje, le dio una nueva dirección a la relación que tendría el Estado y las instituciones públicas con aquello considerado parte del “mundo de la cultura”.

Un año después de la celebración de los 150 años de la Universidad de Chile, fue inaugurado el Centro Cultural Alameda. Este hecho es un contrapunto y un anuncio de lo que serían los nuevos tiempos. La inauguración tuvo lugar el 20 de abril de 1993, fue registrada por los diarios y la televisión y encabezada por el Presidente Aylwin. Lo que ahora nos podría parecer un lugar pequeño y modesto, en ese momento era visto como un gran avance en infraestructura. La escala de los tiempos era otra: durante la dictadura no se construyó ningún centro cultural, ni siquiera una biblioteca. Por eso lo que era sencillamente la remodelación del antiguo Cine Normandie, fue presentado como un avance significativo para la ciudad y el país. Pero había algo aun más relevante que el mero edificio: representaba un nuevo modelo de “gestión cultural”, un concepto que se utilizaría una y otra vez a partir de esa década.

El Centro Cultural Alameda no pertenecía a una institución pública, era una iniciativa gubernamental, pero financiada por privados, según indicaba la prensa con entusiasmo: “De hecho, 29 empresas compraron los derechos de dos butacas por un plazo de cinco años y publicidad, por cinco millones de pesos”. Era el arranque para una nueva manera de concebir la participación del Estado en la cultura, de un modo distinto, tomando distancia, incentivado a través del descuento de impuestos o proveyendo

fondos, montos de dinero a fundaciones o corporaciones que se situarían en un ámbito intermedio: para muchos efectos privadas, pero cumpliendo un rol público. En ese régimen fronterizo fue creado el Centro Cultural Estación Mapocho, el del Palacio La Moneda, el GAM, el Parque Cultural de Valparaíso y el de Cerrillos. Un régimen de excepción que estableció un nuevo circuito que miraba desde una vereda del frente —aparentemente más prospera y moderna— a las antiguas instituciones como el Museo de Bellas Artes, el de Arte Contemporáneo y el Teatro de la Universidad de Chile. La transición abrió un capítulo nuevo: el de los centros culturales de burocracia liviana y desanclados del Estado, espacios de exhibición de artes visuales, salas para montaje de obras de representación y, en algunos casos, grandes salas en arriendo para eventos comerciales salpicados de programación cultural propia.

Esta nueva concepción de institución cultural instalada durante la transición alcanzó incluso a un proyecto iniciado en 1971 durante la Unidad Popular: el llamado Museo de la Solidaridad, una colección donada por los artistas del mundo al pueblo de Chile como gesto de apoyo al gobierno de Salvador Allende. Las obras comenzaron a ser recibidas por el Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile, que se encargaría de mantenerlas y exhibirlas en el Museo de Arte Contemporáneo. Vino el Golpe y fueron guardadas. La colección siguió creciendo en el exilio bajo el concepto de Museo de la Resistencia que mantuvo su espíritu original. La democracia volvió, pero la colección no pasó a formar parte del Estado, quedó bajo la custodia de una fundación.

La transición acabó estableciendo una nueva racionalidad no sólo en el ámbito económico, sino también en el cultural. Como contrapunto a esta nueva lógica, se crearon las fiestas callejeras de la ciudadanía, un impulso para que los chilenos volvieran a ocupar el espacio público, ya no sólo para protestar sino para celebrar, con la excusa que hacerlo era una pulsión “cultural” que nos era propia. Una suerte de impostación carnavalesca, síntoma del entusiasmo de la época.

En una escena de la película argentina *El Ciudadano Ilustre*, un personaje secundario habla en frente del protagonista —un

escritor argentino que acaba de ganar el Nobel de Literatura— sobre la necesidad de una política cultural que beneficie al pueblo. Luego de escuchar, el protagonista —un hombre de expresión seca que hizo su carrera en Europa— se permite discrepar de lo que acaba de escuchar y sostiene que la mejor política cultural es no tener ninguna en absoluto, porque él sospecha profundamente del valor que tal cosa pueda tener. El personaje le teme a la creación de una cultura al servicio del Estado, que acabe satisfaciendo al gobierno en el poder. Razones para temer algo así no le faltaban. Ese mismo temor fue central en las primeras discusiones sobre la creación de una institucionalidad cultural durante la segunda mitad de los años noventa. El modo en que se resolvió fue creando un Consejo de la Cultura, presidido por una autoridad designada por el Ejecutivo, pero conformado por representantes de distintos ámbitos. El rol de aquel consejo sería repartir fondos para proyectos determinados que debían pasar antes por una evaluación de expertos. Nuevamente se impulsaba el desanclaje de las antiguas instituciones y la gestión individual y privada como fórmula preponderante. La postulación a fondos concursables se transformó no sólo en un rito, sino en una forma de vida para una generación de artistas cuyas carreras están pauteadas por los periodos de entrega del Fondart.

La transición, en cierto modo, acabó disciplinando al gremio de los artistas en la lógica del *voucher* —montos de dinero público que se reparten— externalizando la gestión y transformando la relación con los espacios de exhibición en un trámite individual y pasajero. El papel de instituciones como el Museo de Bellas Artes quedó reducido, por ejemplo, al de una sala de exhibición y el de ciertas editoriales independientes, al de imprentas para publicar un libro ya financiado. Un sistema liviano de burocracia, pero también de espesor crítico que, cada tanto, iba siendo domesticado por el autoritarismo político que armaba una alharaca si es que tal obra o determinado libro financiado con fondos públicos, presentaba una mirada que alguien consideraba escandalosa.

Sin duda a partir de los noventa se montaron cada vez más obras de teatro, se multiplicaron las galerías de arte, se roda-

ron más películas, se publicaron más libros. Una flecha que subía persistentemente en un gráfico, en parte porque el punto de referencia que dejó la dictadura era demasiado bajo, pero también gracias a la creación de los fondos para la creación. La duda es si esto ha significado que el público que asiste a esas exposiciones, que ha visto esas películas o comprado esos libros financiados a través de dineros públicos, se democratizara. Sólo un ejemplo: aunque se han construido y formado bibliotecas como nunca antes se hizo, los libros continúan siendo percibidos como un objeto casi suntuario y la mayoría de las librerías del país están concentradas en las cuatro comunas más ricas de Santiago. La desigualdad cobra una nueva dimensión cuando la pregunta es sobre la composición social de las personas que asisten a las obras de teatro o sobre las diferencias de acceso que existen entre la capital y las regiones.

La dimensión cultural y artística de la transición democrática acumula un número significativo de preguntas en torno al modo en que la democracia recuperada le dio la espalda a la tradición que la dictadura interrumpió. Aquel mundo previo al Golpe, que con medios escasos —los de un país pobre y aislado de las grandes capitales— creó un entramado de instituciones públicas que con muchísimas dificultades estableció las condiciones para un desarrollo cultural diverso, que tenía una vocación democrática y pluralista. Ese mundo en el que fue posible que el hijo de un empleado ferroviario se transformara en poeta universal, que una profesora criada en la pobreza llegara a ser distinguida con el Premio Nobel, que una cantora campesina fuera reconocida como una de los genios más importantes del continente o que un provinciano estudiante de teatro se ganara la inmortalidad gracias a sus composiciones musicales. ¿Sería eso posible en la actualidad? Creo que no. La manera en que la política asumió la cultura, la concibe como un conjunto de voluntades individuales dispersas que necesitan dinero para producir obras, no como un espacio común de convivencia continua que convoca. Una fragmentación que lejos de beneficiar la diversidad de miradas, las mantiene disciplinadas y uniformes, en un diálogo que tiende a cerrarse sobre una misma élite, alejada de las muchedumbres y en sincronía con un sistema educacional segregado y violentamente desigual.

LAS DEUDAS DE LA TRANSICIÓN Y EL LARGO CAMINO EN DERECHOS HUMANOS

Fuente: apnews.com

Paz Becerra

Abogada de la Universidad de Chile, dedicada al litigio en Derechos Humanos

Ariel León

Miembro de la Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad (Asodeplu), aymara-quecua

Juan Maureira

Historiador de la Universidad de Chile. Miembro de Londres 38, espacio de memorias

Esteban Miranda

Egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Militante de Izquierda Autónoma

Haydée Oberreuter

Activista de Derechos Humanos. Encargada de Investigación y Memoria de la Corporación de Familiares de ex Prisioneros Políticos Fallecidos - Chile

Enrique Riobó

Historiador de la Universidad de Chile

Resulta indispensable realizar un análisis del estado de la discusión en Derechos Humanos en el ciclo político actual en Chile. Para ello se debe realizar una evaluación crítica del legado dejado hasta la fecha por los gobiernos civiles que siguieron al repliegue de la dictadura civil y militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990. Lo anterior, con el propósito de analizar el estado actual de la cuestión entre las fuerzas democráticas y de izquierda en el país, y su proyección concreta hacia el futuro.

1. Antecedentes: una historia de instalación por necesidad

Los Derechos Humanos como unidad conceptual moderna y sistemática toman forma con posterioridad a las atrocidades cometidas en el contexto del conflicto mundial que asoló a varias regiones del planeta a fines de la década de los treinta y comienzos de los cuarenta del siglo pasado (segunda guerra sino-japonesa y su continuación en la Segunda Guerra Mundial, 1937-1945). Estas involucraron el uso del enorme poder de Estados modernos y sus estructuras organizadas en la ejecución de vejaciones contra la dignidad más elemental de los seres humanos, especialmente contra población civil y enemigos ‘internos’. Ya sea por ventaja militar o por motivos ideológico/políticos, la ejecución extrajudicial, la hambruna provocada, el bombardeo estratégico y la limpieza étnica fueron llevados a cabo en una dimensión jamás vista en diferentes países.

En el contexto inmediatamente posterior a las principales hostilidades se produce la fundación oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU; 1945). Esta tuvo como uno de sus grandes componentes la codificación de una legislación con pretensión internacional, que prescribiera y previniera la perpetración de estos crímenes por parte de Estados contra sus ciudadanos, habitantes y personas bajo su responsabilidad. Uno de sus hitos más relevantes fue la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la que en este año conmemora su 80° aniversario. El concepto de Derechos Humanos tiene, de esa forma, su origen en la tecnocracia legal y la diplomacia de la posguerra: constituye una reacción de las voces ilustradas de la élite occidental y de aquellas élites occidentalizadas en el resto del mundo, que se sumaron rápidamente a dicha iniciativa.

El Estado de Chile, como miembro fundador de la ONU y suscriptor de los distintos instrumentos emanados de ésta, ingresaría en la órbita de países que reconocía dichos derechos y el marco jurídico que los consignaba. Sin embargo, al igual que en la mayor parte del mundo formalmente adscrito a dicho progreso, la población en general desconocía los detalles del alcance del concepto y sus implicancias.

Si bien en Chile el concepto y sus ramificaciones ingresa limitadamente en la política estatal, la discusión académica y los programas de ciertas fuerzas partidarias, es en el contexto de la dictadura civil y militar (1973-1990) que el proceso de expansión del conocimiento de los Derechos Humanos para la población en general experimenta una imperiosa aceleración. Con ocasión de la sistemática persecución y exterminio de que fueron objeto distintas organizaciones y miles de disidentes, se forman al alero del activismo de la población y ciertos sectores del clero¹ de distinta confesión, organizaciones de apoyo y protección de los perseguidos, como la Vicaría de la Solidaridad, así como otras compuestas principalmente de familiares y sobrevivientes, que buscaban el esclarecimiento de los crímenes y el destino final de aquellos desaparecidos bajo custodia del Estado y sus distintos órganos represivos.

Dicho proceso de carácter defensivo de los sectores subalternos y disidentes impacta en forma muy poderosa en el imaginario político de las distintas izquierdas y fuerzas democráticas del período. Las violaciones de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, en ocasiones auxiliados por civiles, se transforman en una de las razones más poderosas para la organización de la protesta social que finalmente llevaría al régimen a pactar su retirada bajo las formas plebiscitarias. En buena medida, la defensa de estas banderas será fundamental para la legitimidad que van adquiriendo las distintas oposiciones del período y, en particular, para el relato de la Alianza Democrática y los posteriores gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.

1 Si bien el trabajo institucional fue convulsionado por la existencia de disenso dentro de las distintas iglesias con presencia en Chile, la solidaridad con la disidencia se vio encarnada en figuras prominentes como el obispo Helmut Frenz en la Iglesia Luterana; así como el cardenal Raúl Silva Henríquez y sacerdotes de dedicación a sectores populares como Mariano Puga, en el caso de la Iglesia Católica.

2. La Transición temprana y la justicia en la medida de lo ineludible

Concluidos los procesos de negociación y pacto para el repliegue, la materialización del retorno al gobierno civil electo (1990-actualidad) tiene entre sus principales promesas el realizar decididos progresos en los pilares de la llamada “Justicia Transicional”. Este concepto, que toma forma en la academia, a partir de distintas experiencias de paso de regímenes dictatoriales a gobiernos electos, tiene como fundamento alcanzar Ver-

dad y Justicia sobre los crímenes cometidos, Memoria Histórica para la población, Reparación para las víctimas y sus cercanos; y, finalmente, implementar medidas de no Repetición para prevenir que se repitan violaciones de Derechos Humanos.

Estas se cumplen parcialmente, con hitos que son, en buena parte, producto de la presión social de las organizaciones que nacieron para la defensa de los Derechos Humanos en el período dictatorial. El Estado transicional prioriza sus objetivos en el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada, personas de cuyo paradero se desconoce desde su último aviso a manos de agentes del Estado, y las víctimas de ejecuciones políticas cuyo paradero fuera conocido. Para ello convoca a la Comisión de Verdad y Reconciliación², conocida como Comisión Rettig, que continuó por medio de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación³. Dicho proceso excluye de sus objetivos el esclarecimiento y reparación a las víctimas de prisión política y tortura, a quienes se les señala que deben ser pacientes para atender las prioridades fijadas por el gobierno en un primer momento. Del informe de la Comisión, se establece el Programa Continuator⁴ para dar asistencia legal a las víctimas y reparación, que funciona hasta el día de hoy.

La alianza política que controló buena parte del poder estatal durante este período, la Concertación de Partidos por la Democracia, maniobró en medio de las presiones del mundo social organizado por lograr mayores avances efectivos y los términos del pacto alcanzado entre ellos mismos con los militares y la derecha política. Por lo anterior, las acciones para lograr los objetivos declarados de la Justicia Transicional son episodios que ocurren en la medida que son demandadas socialmente y la conveniencia política las hace ineludibles, más que por la voluntad misma de los diferentes gobiernos de turno. El resultado de tal proceso es una mezcla compleja de indiferencia política en un sentido general, que se ve momentáneamente interrumpida por eventos donde organizaciones de la sociedad civil son capaces de empujar los avances en estos ámbitos, tales como los procesos judiciales contra los autores de los crímenes y otras figuras de poder del régimen que comienza en los años noventa.

2 Oficialmente, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el Decreto Supremo N°355 del Ministerio del Interior, del año 1990, por iniciativa del Presidente Patricio Aylwin. Recibe ese nombre por haber sido presidida por el jurista Raúl Rettig.

3 Creada por la Ley 19.123, de 1992, por iniciativa del Presidente Patricio Aylwin.

4 Oficialmente, "Programa Continuación Ley N° 19.123", conocido como "Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", creado por el Decreto Supremo N°1005 del Ministerio del Interior, del año 1997.

5 Oficialmente, “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, creada por Decreto N°1040, del 26 de septiembre de 2003, por el Presidente Ricardo Lagos. Recibe su nombre por haber sido presidida por el obispo Sergio Valech.

6 Oficialmente, “Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura”, creada por la Ley N° 20.405, publicada el 10 de diciembre de 2009, por la Presidenta Michelle Bachelet. Recibe su nombre por haber sido presidida en principio por el obispo Sergio Valech. Con su fallecimiento el 24 de noviembre de 2010, asume su presidencia María Luisa Sepúlveda.

7 Para una revisión de la cronología de gestiones y movilizaciones realizadas por los ex Prisioneros Políticos y Familiares, ver López, P. y Alarcón, M. (2018, 7 de marzo). Ex presos políticos esperan que Bachelet cumpla alguna promesa. *Radio UChile*.

Pese a lo complejo y caótico del avance, la tecnocracia y el discurso oficial proyecta un relato, a la sociedad y al mundo, de un progreso con estándares envidiables para otros países con procesos similares. La Concertación proyecta, así, una imagen de capacidad para la administración del poder y modernización del país en términos políticos, tomando crédito frente a la alianza social dominante, los organismos internacionales y los intereses extranjeros, por ser quienes renovaron las credenciales democráticas del Estado chileno para su participación en apropiadas condiciones en el mercado mundial. La Concertación ha empleado hábilmente el clivaje dictadura/democracia, teniendo el discurso de Derechos Humanos como una de las herramientas más importantes de movilización de sus bases y la población en general en sucesivas instancias electorales, aplicándolo como un mecanismo de diferenciación respecto de la derecha política organizada.

Dicho relato no estuvo, como se ha dicho, libre de sobresaltos. Ya en los años dos mil el reclamo de las víctimas de prisión política y tortura, excluidas de procesos de reconocimiento y reparación, provoca la convocatoria de las Comisiones especiales para dichos temas, conocidas como Comisión Valech I⁵ y Comisión Valech II⁶. Los informes realizados por dichas comisiones se hicieron públicos, no obstante, los antecedentes recopilados por las comisiones Rettig, Corporación Nacional de Reparación y Conciliación y Comisión Valech II, quedaron sujetos a reserva y solo pueden acceder a ellos los Tribunales de Justicia. Sobre los antecedentes recopilados por la “Comisión Valech I”, se impuso un secreto de 50 años que obsta el acceso a cualquier persona, incluido el Poder Judicial. Dicho secreto no fue claramente establecido para quienes declararon ante tal instancia y las organizaciones de ex prisioneros políticos y familiares mantienen el reclamo de su apertura hasta hoy⁷.

3. La “renovación” de la Derecha

El triunfo en las elecciones presidenciales de Sebastián Piñera en 2009 provocó un nuevo escenario en relación a las deudas en Derechos Humanos. No solo sería Sebastián Piñera quién reciba los resultados del trabajo de la segunda Comisión Valech

en 2011, sino que su gobierno, primera expresión de victoria electoral en el campo presidencial de su sector en varias décadas, comenzaría a delinear su propia aproximación al asunto.

El gobierno implementaría una estrategia para instalar su propio relato, que resultaría convergente con el concertacionista, y se levantaría con el objetivo de disputar el monopolio que ésta detentaba en la materia hasta ese momento. Piñera se presentaría como un Presidente que había participado del Plebiscito de 1988 votando contra la dictadura y que no dudaba en cuestionar y reprochar las acciones de su propio sector en relación al régimen. Este discurso alcanzó su máxima expresión en las acciones tomadas el año 2013. En agosto de dicho año, Piñera realizaría su recordado juicio a los civiles de su sector que colaboraron con el régimen dictatorial, a los que calificó de “cómplices pasivos”.

Dicho discurso fue seguido de la decisión de cerrar el Penal Cordillera, orientado a criminales de lesa humanidad, un hecho inesperado de parte de un Presidente de derecha, siendo que el penal había sido creado precisamente por la Concertación como concesión especial a los militares en el año 2004. Es así como el gobierno de derecha elaboró su propio libreto, donde profundizó el discurso de los gobiernos concertacionistas en relación al progreso alcanzado por el país en materia de democratización política y respeto por los Derechos Humanos.

Mientras el proceso de la llamada “renovación socialista” consistió en el tránsito de sectores de los viejos partidos de izquierda hacia la aceptación del modelo económico neoliberal durante los años ochenta y noventa, con el fin de adoptar sus principios y probar su capacidad de gobernar, el proceso realizado por la derecha en el gobierno parecía ir en una dirección distinta. Dicha coalición no tenía necesidad de demostrar su fidelidad al modelo económico, pues muchos de sus integrantes participaron directamente en su implementación. En su lugar, la derecha daba sus propias muestras de “renovación” al demostrar sus credenciales en democracia, mostrando que adoptaba sus principios y tenía capacidad de administrar una gobernanza moderna en igual condición que la Concertación.

4. El retorno de Bachelet (primero) y Piñera (después)

El inusual fenómeno de paso de postas entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en sus sucesivos gobiernos, provoca una situación que lejos de resolver las deudas en materia de Derechos Humanos de crímenes cometidos en dictadura, las agrava. La llegada nuevamente al gobierno de Bachelet el año 2014 se produce en medio de un gran respaldo popular. Jugando a incorporar tanto como sea posible del malestar social expresado en las calles en los años previos, asume con un programa en Derechos Humanos que promete zanjar las diversas deudas que el Estado tiene para con los pilares de la Justicia Transicional. Sin embargo, a poco andar, se manifiestan diferencias internas en su coalición en relación a las reformas principales levantadas en su campaña. A lo anterior se le suma el escándalo político de tráfico de influencias que involucraría a su familia y el de irregularidades en el financiamiento de su campaña por parte de varios de sus colaboradores políticos más directos. Sumados al clima público de desconfianza creado por casos de corrupción política en general, estos golpes resultan mortales para la capacidad y vitalidad del gobierno en la implementación de sus políticas prioritarias, siendo los temas de Derechos Humanos postergados nuevamente.

Ante este escenario, diversas organizaciones de defensa de Derechos Humanos, en particular, el mundo de ex Prisioneros Políticos y Familiares, retoman en el año 2015 movilizaciones y gestiones activas para exigir el cumplimiento de los compromisos sostenidos con ellos. Dicha situación derivó en una intensa movilización que incluyó la realización de una huelga de hambre por varios ex prisioneros⁸. La solución negociada en dicha oportunidad no fue respetada en su integridad, lo que llevaría nuevamente a las organizaciones a movilizarse el año 2017 por el incumplimiento de las promesas, en tal oportunidad, ocupando varias de las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el país⁹.

Esta delicada situación fue agravada por la desprolijidad del gobierno en ejecutar algunos de sus compromisos más sensibles en este ámbito, como el fracaso del cierre del penal especial Punta Peuco, entre otras iniciativas¹⁰. El período final del

8 Ver compendio cronológico de cartas y declaraciones recogidas en *Le Monde Diplomatique*. (2015).

Huelga de hambre de ex presos políticos. *Le Monde Diplomatique*.

9 El Clarín. (2017, 20 de marzo). Declaración de ex presos políticos movilizados. www.elclarin.cl

10 Becerra, P., Maureira, J., Miranda, E., Oberreuter, H. y Riobó, E. (2018, 29 de marzo). La improvisación de último momento en Derechos Humanos de la Nueva Mayoría. *Bio Bio Chile*.

gobierno de Bachelet, inactivo y concentrado en conservar sus frágiles equilibrios políticos internos, dejó a las organizaciones políticas y sociales en un desorden profundo sobre la forma cómo enfrentar el inminente retorno de Sebastián Piñera al poder. Una parte de los partidos de la Nueva Mayoría concentraría grandes esfuerzos en la defensa del legado de la anterior administración, bloqueando todo atisbo de crítica e intentando reeditar el viejo clivaje dictadura/democracia en materia de Derechos Humanos.

En ese escenario, el gobierno entrante de Sebastián Piñera ha tenido un desempeño donde no parece consolidar un solo discurso en la materia. Apelando a su sector de apoyo más duro en la campaña presidencial misma, mostró un tono de conservadurismo considerablemente más marcado en la materia, estableciendo el perfil de Piñera como el de un oponente a futuros progresos, como el del cierre del penal Punta Peuco que recién había fracasado y que se comprometió a mantener abierto.

Dicha figura contrasta con el discurso presentado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos del actual gobierno, Hernán Larraín, quién en junio de este año fue interpelado por el retiro del proyecto de ley presentado en los últimos días de la administración anterior, para dar un aporte único reparatorio a víctimas de prisión política y tortura. En dicha instancia, realizó una irrestricta defensa de lo alcanzado por la Transición en materia de Justicia Transicional¹¹. Desde su primera intervención alabó las políticas emprendidas por la Concertación en materia de búsqueda de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y no Repetición, señalando que las consideraba como iniciativas que tenían el estatus de política de Estado más que de gobierno, y señalando las alabanzas que Chile ha recibido de observadores extranjeros. Su desempeño fue extremadamente hábil frente a las preguntas de la interpelación, afirmando en todo momento su compromiso con la continuidad de estas políticas, pero señalando la imposibilidad de cumplir con el proyecto retirado por limitaciones financieras. Tildó a la oposición de oportunista por reclamar el retiro de un proyecto cuyo propio gobierno anterior no fue capaz de evacuar.

¹¹ Ver material audiovisual en T13.cl. (2018, 6 de junio). Interpelación a ministro de Justicia Hernán Larraín. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=OIUFZ4xmKHc>

Aún es pronto para prever cuál será el discurso que terminará asentándose en esta materia en el gobierno en los años que le restan de gestión o si, por el contrario, tendrá en forma constante este aspecto zigzagante. Luego de reeditar la renovación de credenciales, el mismo Piñera volvió a jugar su papel de conservador en la materia, siguiendo lineamientos planteados desde los socios más a la derecha de su coalición en la fecha del 11 de septiembre recién pasado¹².

5. La izquierda y el presente

Frente al camino descrito, la izquierda y las fuerzas democráticas tienen ante sí un escenario complejo. La adopción de los Derechos Humanos como herramienta defensiva frente a la brutal persecución estatal durante la dictadura ha generado profundos efectos en la forma como la izquierda y la sociedad los percibe y ubica en el entramado social e institucional.

Primeramente, al ser una causa levantada por las fuerzas de izquierda y democráticas durante varias décadas, el término Derechos Humanos ha adquirido una connotación profundamente partisana para la población general e incluso para algunos operadores del sistema político. Dicha situación se torna especialmente compleja ante escenarios de discusión, en el seno de la izquierda, sobre apoyos políticos internacionales a procesos políticos de protagonismo popular que no cumplen con todos los elementos de la democracia liberal al cual los Derechos Humanos suelen complementar y estar relacionados. La dificultad de analizar estos procesos en su complejidad¹³ lleva a los rostros más distintivos a resolver dichas adhesiones o críticas sin posibilitar procesos colectivos que orienten una apropiación del término más allá de la pura negación del concepto, o su asimilación acrítica en la clave liberal de su origen.

Dicha aceptación acrítica de los valores liberales, sin situarlos en el terreno concreto ni complementarlos con un análisis de las condiciones políticas concretas, económicas y materiales para su defensa, provoca adicionalmente la incapacidad de la izquierda para unir demandas relativas a violaciones de Derechos Humanos bajo un paraguas común que vaya más allá

¹² El Mostrador. (2018, 11 de septiembre). Adiós a los cómplices pasivos de Piñera: “Nuestra democracia no terminó por muerte súbita ese 11 de septiembre de 1973”.
El Mostrador.

¹³ Ver Rojas, C. y Quintanilla, D. (2018, 21 de agosto). A 70 años de la Declaración Universal de DD.HH.
El Mostrador.

de la violación sobre los derechos elementales de primera generación (civiles y políticos principalmente), sino que apunte a un enfoque indivisible e interdependiente de todos los derechos en igualdad. Es así como se genera un vacío en no explotar el potencial de derechos sociales como la educación, la salud o la previsión, desde una óptica de Derechos Humanos, para darle mayor profundidad a su reivindicación.

Si bien esta arista ha sido explorada por movimientos sociales en el último tiempo, las organizaciones propiamente políticas han carecido de una mirada más consistente y sistemática al respecto. Una que permita dar una lectura revolucionaria y unificadora a la defensa de los Derechos Humanos y las luchas que se agrupan bajo dicho manto, como contracorriente de un contexto donde prima la dispersión de dichas demandas, por ejemplo, de autodeterminación indígena, de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de derechos laborales o los problemas asociados al fenómeno de la migración.

Esta incapacidad de analizar y proponer una perspectiva unificada es el origen del problema. La incapacidad de las fuerzas democráticas y de izquierda de plantear proyectos de mediano y largo plazo sobre Derechos Humanos en una clave de contenido positivo, en lugar de actuar en forma reactiva frente a hechos de violación de estos. La identificación de esta dificultad ha llevado a que comiencen a realizarse intentos por plantear agendas de largo plazo en materias como la deuda vigente en el combate de la impunidad¹⁴ políticamente promovida, que goza de buena salud en el país y cumple un papel fundamental en la restricción del ejercicio verdaderamente democrático en el Chile actual¹⁵.

Sin emprender un camino decidido a corregir estos y otros problemas en la forma de abordar la realidad sobre este tema, continuará imperando la incapacidad de combatir los límites a la democracia y la falta de derechos que caracterizan el estado actual de la sociedad chilena. El desafío de la construcción de una agenda de Derechos Humanos que defienda irrestrictamente su condición como progreso humano hacia la emancipación es hoy tan urgente como importante. 

14 Ver la proposición de la diputada Camila Rojas, elaborada con el apoyo del Equipo de Derechos Humanos de Fundación Nodo XXI, en materia de regulación específica para combatir la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos en dictadura. Rojas, C. (2018, 13 de septiembre). Legislar ya contra la impunidad. *El Desconcierto*.

15 Rojas, C., Oberreuter, H., Saavedra, V., y Articulación DD.HH. Izquierda Autónoma. (2018, 13 de agosto). El Supremazo como herencia de la Transición. *The Clinic*.

LIBERALISMO Y NEOLIBERALISMO: EL PARTIDO LIBERAL EN EL FRENTE AMPLIO

Vlado Mirosevic

Diputado del Partido Liberal de Chile por la región de Arica y Parinacota
Cientista político y Magíster en Periodismo digital por la Universidad Mayor

Patricio Morales

Fundador del Partido Liberal de Chile
Cientista político y Magíster en Políticas Públicas del Departamento
de Economía de la Universidad de Chile.

El presente texto busca instalar históricamente la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo. Se analiza la transición a la democracia como un proceso necesario para acabar con la dictadura cívico militar de Pinochet, pero a su vez se presenta una crítica política de cómo se abordó la transformación de la herencia neoliberal. Se establece que la desconexión entre política y sociedad es la principal consecuencia de los “desbordes” de la transición, y que sin la superación de esa brecha será difícil repensar el sistema político chileno. Finalmente, se busca proyectar una nueva forma de acción política desde el Frente Amplio, que sea capaz de abordar de manera efectiva el malestar social.

Antes de reflexionar sobre la transición a la democracia en Chile y su relevancia en el presente, nos parece necesario hacer una breve descripción del espacio desde el cual miramos este proceso: el Partido Liberal. Este movimiento, que logró ser partido político el año 2013, parte del reconocimiento de que no existe un liberalismo y más bien estamos frente a un conjunto de liberalismos, es decir, distintas versiones de un tronco común, pero que en sus derivaciones abriga diferencias evidentes¹. El tipo de liberalismo que se hace referencia es un liberalismo igualitario, también llamado socio-liberalismo o liberalismo progresista. Una tradición histórica que parte con John Locke, quizás padre del liberalismo moderno, o incluso con humanistas como Lucrecio, Erasmo de Rotterdam o Giordano Bruno, quienes develaron diversos dogmas sobre los que se tejió el proceso histórico en el que se sitúa el concepto moderno de liberalismo según se conoce hoy. Posteriormente toman relevancia otros referentes, entre los cuales destaca la obra de John Stuart Mill, con su famoso manifiesto *Sobre la libertad*, que dibuja ese espacio de soberanía personal donde ni el Estado moderno, las iglesias o la sociedad pueden interferir, tanto a nivel político como a nivel económico². En la actualidad encontramos referentes de este tipo de liberalismo en el pensamiento de John Rawls, Ronald Dworkin, Norberto Bobbio, entre otros. A nivel chileno no se puede dejar de mencionar a Agustín Squella³.

Avanzando hacia una definición más aterrizada del liberalismo al que se hace alusión, se trata de un liberalismo que combina libertad e igualdad sin sacrificar una en nombre de la otra. Ni sacrificar libertad en nombre de la igualdad, ni tampoco sacrificar igualdad en nombre de la libertad. Esa justa combinación, difícil de implementar, por cierto, es la definición más clarificadora de lo que busca el Partido Liberal de Chile o cualquier actor que se presente en la actualidad como liberal igualitario.

1. Neoliberalismo cívico-militar

En términos históricos, previo a la transición democrática, la dictadura cívico-militar trajo consigo una confusión radical sobre el concepto liberal en Chile. El proyecto revolucionario

1 Mirosevic, V. (2018). *Libres e iguales: Conversaciones con Agustín Squella*. Santiago: FCE.

2 Mirosevic, V. (2015). *Liberales plebeyos: el relato de un pipiolo del siglo XXI*. Santiago: RIL Editores.

3 Squella, A. (2012). *¿Es usted liberal? Yo sí, pero...* Santiago: Lolita Editores.

liderado por los *Chicago boys* dinamitó deliberadamente una frontera conceptual del liberalismo, llevando principios liberales a un extremo radical, guiado por un fanatismo y una especie de laboratorio social que bien describió Michel Foucault ⁴. Chile se convirtió en un país pionero a nivel mundial en la implementación de un sistema neoliberal⁵. Reflexiones como las de Sergio de Castro, Joaquín Lavín, José Piñera, Miguel Kast o Ernesto Fontaine, plasmaron en la dictadura de Pinochet lo consolidado por sus mentores internacionales: Arnold Harberger, Milton Friedman, Gary Becker, Theodore Schultz, entre otros. De ese modo, la Escuela de Chicago sirvió de guía para una de las transformaciones más profundas de la historia de la sociedad chilena y fue en ese mismo trance que el liberalismo progresista, aquel que busca una sociedad “con” mercado, pero no una sociedad “de” mercado, que fue lo implementado por la dictadura, quedó conceptualmente ponderado en el mismo espacio: “los liberales”. El nivel de radicalidad de los *Chicago boys* los llevó a implementar lógicas de mercado en todas las esferas sociales posibles: salud, educación, seguridad social, el mundo del trabajo, etc., cuestión que, siendo teóricamente estrictos, resulta hasta contradictorio con el liberalismo⁶. Pero los *Chicago boys* se autodenominaron siempre como “liberales” en el discurso público⁷. Es con este manto de confusión conceptual, en un contexto de suma adversidad, que hoy se busca reconstruir un espacio liberal en Chile, y específicamente un proyecto político de proyección liberal-igualitaria.

4 Foucault, M. (2006). *El nacimiento de la biopolítica*. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

5 Valdés, J. G. (1989). *La Escuela de Chicago: Operación Chile*. Santiago: Grupo Editorial Zeta.

6 McCloskey, D. y Ziliak, S. (2008). *The Cult of Statistical Significance: How the Standard Error Costs Us Jobs, Justice and Lives*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

7 Rosende, F. (2007). *La Escuela de Chicago: una mirada histórica a 50 años del convenio de Chicago/Universidad Católica. Ensayos en honor a Arnold Harberger*. Santiago: Ediciones UC.

8 Fuentes, C. (2012). *El pacto: poder, constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010)*. Santiago: Ediciones UDP.

2. Transición necesaria: fin de la dictadura

Desde un punto de vista sociológico, analizamos que la transición democrática debió hacer frente a una transformación de la sociedad chilena en tres niveles, aunque hasta hoy es difícil descifrar con claridad la profundidad de la fractura social. Un primer nivel de atención fue la institucionalidad política, donde la continuidad de la Constitución de 1980 fue el paraguas de diversos cuerpos legales enfocados en asegurar desequilibrios en el cómo se producían acuerdos y mayorías democráticas⁸. Un segundo nivel, puso énfasis en la transformación de los pilares del sistema económico, donde se profundizó la concentración

y relevancia de las economías extractivas, se reconfiguró la legislación y el mapa de actores de la banca, y se concentró el mercado de capitales con el sector financiero, principalmente por medio de un cuestionable proceso de privatizaciones. En un tercer nivel, como ya anticipábamos, se implantó una lógica de mercado en todas las esferas sociales posibles: educación, salud, previsión y seguridad social.

En todas las dictaduras se pierden derechos. Sin embargo, la dictadura cívico-militar chilena trajo aparejada una revolución neoliberal que transformó profundamente el país en términos de lo social, y su magnitud terminó por desbordar por completo el proceso de transición política a la democracia. La gestión política del proceso, liderada por la Concertación, optó por restablecer solo una democracia parcial, y a esto aparejar políticas sociales de focalización del gasto como una forma de dotar al mercado de un factor más “solidario”. Sin consolidar un interés real por modificar los cimientos del sistema implementado, ya sea porque no se relevaron las consecuencias negativas del sistema neoliberal o por un acuerdo deliberado entre las partes involucradas, el resultado final fue deficiente en los tres niveles de análisis expuestos. Sin embargo, y pese a esas profundas deficiencias políticas, el fin de la dictadura es un proceso que hay que revisitar constantemente, ya que la democracia semi-soberrana⁹ que se logró fue un gran paso para recuperar derechos sociales y políticos, y junto a esto, proyectar un modelo de desarrollo capaz de mirar el futuro y no estancarse en el pasado.

Los gobiernos de la Concertación tuvieron una gestión política compleja, pero dentro de los marcos y límites de la época lograron avances considerables. El gobierno del presidente Patricio Aylwin fue un gobierno exitoso en asegurar que no existiese un retroceso en la consecución del “retorno a la democracia”, sobre todo considerando que este consenso estuvo en peligro constante bajo el liderazgo activo del dictador Augusto Pinochet, prácticamente durante toda la década de los noventa. El gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue capaz de comprender y anticipar las virtudes económicas de la globalización de los mercados, conduciendo una inserción pionera de Chile en el contexto internacional. El gobierno de Ricardo

9 Huneeus, C. (2014). *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*. Santiago: Taurus.

Lagos, que significó el retorno de un socialista a la presidencia, permitió cerrar un ciclo de maduración del sistema político chileno, el cual puso fin a un proceso de renovación de una izquierda marxista y dio paso firme a una cultura socialdemócrata y social liberal del progresismo en Chile. Finalmente, con considerables avances constitucionales, la necesidad de repensar la seguridad social y abordar los derechos sociales a nivel político, llegó a la presidencia la primera mujer en la historia de Chile, Michelle Bachelet, quien en sus dos gobiernos debió liderar un progresismo en crisis y redefinición.

Sin embargo, la relación entre política y sociedad se fue fracturando año a año. De forma paralela fue madurando un proceso de reconfiguración del sistema político, y el despertar ciudadano expresado en las protestas educacionales del año 2006 dio paso a diversas movilizaciones ciudadanas que repusieron el desborde y contradicciones provocadas por la transformación neoliberal. Esos fueron los elementos que la transición democrática no fue capaz hacer frente.

3. Desbordes de la transición: demasiado polvo debajo de la alfombra

La transición democrática, al pretender cerrar el proceso histórico de la dictadura, terminó ponderando exclusivamente lo formal e institucional, como fue la restricción a la democracia. Pero subvaloró y desestimó que la transformación neoliberal terminaría por vaciar la política, dejando al progresismo carente de identidad y debilitando hasta niveles críticos la participación y legitimidad ciudadana. La desconexión entre política y sociedad llegó a niveles críticos, dando paso, a su vez, a la paradoja de que la propia incapacidad de la transición a la democracia fue lo que terminó poniendo fin a la Concertación. Incluso fue un elemento fundamental para que la Nueva Mayoría no lograra proyectarse en el tiempo, tanto a nivel político como electoral.

Revisemos algunos de los puntos críticos que desbordaron el cálculo político de la transición:

a) Las privatizaciones ejecutadas durante la dictadura, que no contaron con controles de legalidad o fiscalización del Congreso Nacional, son hasta el día de hoy cuestionadas de forma permanente por la ciudadanía y se han transformado en una deuda histórica frente a la probidad que se exige a un sistema democrático.

b) La política social de carácter subsidiario implementada por el fanatismo de los Chicago boys, impuso un régimen de mercado sobre la educación, la salud, pensiones, etc. Con esto, ningún gobierno democrático contó con un sistema institucional capaz de contrarrestar la segregación o la desigualdad. Si bien se extremó una política social de focalización que permitió superar exitosamente las altas tasas de pobreza, esto no constituyó un marco suficiente para la concepción de políticas públicas con la capacidad de asegurar movilidad social o llevar al país hacia un desarrollo sostenible¹⁰. En este punto, la transición a la democracia terminó por desbordarse frente a conceptos que hoy están en la palestra, como son los derechos sociales. Esto implicó un abandono de la promesa de asegurar un piso mínimo de igualdad desde donde cada chileno pueda desarrollar su propio proyecto de vida.

c) Las consecuencias de la transformación del sector financiero y la recomposición de la banca implicó que instrumentos como créditos bancarios, masificados desde el retail, comenzaran a canalizar la implementación del mercado sobre los derechos sociales. Hoy el fenómeno del endeudamiento genera una frustración ciudadana y no se ve en la política un espacio de justicia frente a los abusos y desigualdades del sistema. Los créditos de consumo, tarjetas de crédito y avances en efectivo, se vuelven la única válvula de escape y puerta de acceso a educación, salud y vejez digna.

d) Finalmente, durante el último gobierno de Michelle Bachelet, Chile enfrentó uno de los desbordes angulares de la transición democrática. La relación entre política y negocios develó una de las grandes razones de porqué el sistema político ha dejado de responder a demandas ciudadanas. Los casos judiciales de Penta y Soquimich desencadenaron un quiebre transversal en la legitimidad de los partidos políticos. El financiamiento irregular

¹⁰ Rojas Lasch, C. (2010). "Gobernar la extrema pobreza: un análisis del dispositivo de intervención Chile Solidario-Puente". En Lemm, V. (ed.). *Michel Foucault: neoliberalismo y biopolítica*. Santiago: Ediciones UDP, pp. 51-85.

de la política se posicionó como una carga imperdonable, llegando incluso a sostener que esta desregulación fue pactada por la misma transición democrática.

4. Frente Amplio como respuesta a la transición

Tal como mencionamos, las protestas educacionales de 2006 iniciaron un proceso de profundo malestar ciudadano. En los años siguientes fuimos testigos de como a las demandas por gratuidad y calidad en la educación se sumaron movilizaciones contra el endeudamiento, los estándares medioambientales, las bajas pensiones o el costo y calidad del sistema de salud. Los desbordes de la transición calaron hondo en la ciudadanía. El sistema político se vio rodeado por un descrédito transversal. Y es desde aquí que se organizó el Frente Amplio como una tercera vía al duopolio de Chile Vamos y la Nueva Mayoría. Bajo los principios de democratización, transparencia, derechos sociales y regionalización, se construyó un abanico liberal progresista que reunió a partidos políticos y movimientos de izquierda tradicional, socialdemócratas, humanistas, ecologistas, liberales y muchos independientes con sintonía hacia las demandas de malestar social.

En la actualidad el Frente Amplio se posiciona como un espacio político que busca construir un programa que supere los desbordes de la transición, y para eso se debe comprender y aprender de dicho proceso histórico. Los desafíos de cualquier organización política son potenciar una sintonía permanente con la ciudadanía, pero al mismo tiempo, ser capaz de procesar el malestar social. Esto implica comprender su origen, sus causas, la lógica que produce en la sociedad, para luego promover una acción pública de reforma específica. El Frente Amplio se encuentra en una encrucijada histórica similar a la que se vivió en la transición democrática. El desafío es procesar correctamente el vacío político y la pérdida de identidad que ha generado la transformación neoliberal, reconstruyendo y reconectando lo político con lo social. El riesgo es que la política transicional, llevada al presente, ha heredado un reflejo inmediato a sumarse a los movimientos sociales e independientes buscando la cooperación, la imitación y repetición de la política por causas, que

es una forma de abordar la política como mera persecución de demandas sociales, siendo incapaz de acometer, con profundidad cultural, la generación de confianzas y la construcción de mayorías democráticas efectivas. Hoy el Frente Amplio debe buscar una práctica política que salga del modelo del “mirarse a sí mismos” y llevar la política hacia el mirar hacia afuera, hacia un mundo más amplio¹¹.

El desafío liberal progresista es aportar con un anclaje sobre la conciencia del futuro de comunidad en su conjunto. Esto implica que el malestar social y la reivindicación se encauce en un proyecto viable de futuro, uno que amplíe el contrato social en Chile. Para construir confianzas se debe partir de la base que asegurar derechos sociales es posible sin descuidar la economía ni el crecimiento económico y, a su vez, instalar que es imposible alcanzar un progreso económico duradero si no lleva de la mano una sociedad con mayor cohesión y menos desigualdad. El crecimiento económico se debe sostener en los derechos sociales como fin primordial, o el resultado será repetir una transición democrática que no fue capaz de generar un equilibrio entre política y empresa como pilar de un nuevo pacto social en democracia. El país que ofrezca el Frente Amplio debe dar las condiciones para la generación de riqueza, y que al mismo tiempo esta permita una redistribución que sostenga un sistema completo de derechos sociales. Este pacto social es negado tanto en la teoría como en la práctica por el proyecto neoliberal de la dictadura. Pero este pacto social es lo más parecido al camino que han transitado los países desarrollados durante su historia, donde no hay aversión a los derechos sociales, pero tampoco se subvalora la importancia de la economía abierta y de mercado sujeta a los marcos democráticos.

Al (re)visitar el espíritu inicial de la transición democrática, y considerando los desbordes neoliberales que evidenció, se torna ineludible reflexionar en torno a la superación del vacío y la inercia políticas que hemos expuesto, teniendo siempre a la vista el quehacer político resultante. La política no solo puede ser un oficio táctico, también se debe dotar de un profundo contenido capaz de proyectar un futuro de confianzas y consensos en la sociedad.

11 Lilla, M. (2018). *El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad*. Madrid: Debate.

**DIAMELA ELTIT**

FUENTE: rincondcriticaliteraria.wordpress.com

“En la transición nunca dejé de mirar lo que tenía que mirar”

Han sido días de reconocimiento para Diamela Eltit. Y es que su obra ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura 2018. Poco antes, eso sí, y haciendo un alto en la ajetreada agenda que la llevaría de vuelta a Nueva York para retomar sus clases, concedió esta entrevista a *Cuadernos de Coyuntura* para hablar sobre la transición y sus nudos, la cultura y literatura de esta época, así como de la actualidad, desde su lugar de activista y escritora que ha visto y reflexionado sobre un proceso iniciado hace ya treinta años.

En momentos en que se conmemora el plebiscito, ¿Qué hitos, en este arco de 30 años, se relacionan con tu trabajo?

Tuve algunas preguntas críticas sobre la transición. Es decir, la forma en que eso se efectuó, evidentemente, tampoco podía ser de otra manera: este pacto entre ciertas fuerzas democráticas con la dictadura y con quienes podrían ser cómplices de la dictadura. Entonces, para la historia social, corporal, era fuerte ver ese pacto. Pero nadie podría negar que terminar un estado de cosas como ese —que pasaba sobre todo por la vulneración de derechos básicos de la gente— era interesante, porque habíamos estado bajo estado de excepción, con la mayor parte de las libertades restringidas. Lo que era difícil de asumir eran las condiciones en que se producía esto, vale decir, se producía con Pinochet incluido, con el dictador adentro. Desde mi perspectiva, la dictadura duro más que su realidad, porque Pinochet quedó dentro, primero, como comandante en jefe, y después, como senador designado. Está muy subordinada toda la transición a esa figura. Para mí la dictadura no duró 17 años, sino más o menos 25.

En mi caso particular, viví estos 30 años con más preguntas críticas, en el sentido de que el nombre transición —por lo menos de los 17 o 25 años— no era real, era una ficción, necesaria seguramente, pero una ficción porque el dictador estaba ahí. Desde el punto de vista simbólico mantenía una cuota de poder más alta que los demás, precisamente por la violencia. Y después, viene el tema de la instalación acrítica del neoliberalismo que sumó una frontera compleja de vivir en la relación entre sujeto y objeto, con la indeterminación entre sujeto y objeto, el consumo y el consumismo. El consumismo es un gran método para diluir la angustia, por un lado y, por otro, para hacer de la memoria algo retardado, periférico.

El consumismo se vuelve una carta de ciudadanía.

Sí, pero de ciudadanía para el olvido, es un anestésico. Un anestésico y, lo que está detrás de eso, es una opresión a la memoria para dejar esa memoria en lugares periféricos, como el libro sobre los Derechos Humanos que hace Aylwin [Informe Rettig]... es un libro sin circulación. Es un acto, pero para la periferia del sistema. Entonces mi impresión fue —viendo

cómo se iba desarrollando un estado de cosas— que favorecía, por supuesto al capital, que oprimía la memoria de forma muy considerable. Ese pacto alcanzaba una dimensión mucho más amplia de lo que era necesaria, se amplió demasiado el pacto, no hubo freno.

Yo había publicado antes, durante la dictadura, por lo tanto, seguía escribiendo, pero muy atenta a estas nuevas formas de opresión. No quiero igualar la transición con la dictadura porque no es así, eso sería un error, porque sería desconocer la muerte, sería desvalorizar las muertes bajo dictadura. Una desvalorización del tema de los Derechos Humanos. Pienso que lo que pasó ahí es lo más grave que ha pasado en el siglo XX, pero eso no significa que hay una gravedad en otro registro, otra devaluación entre el 88' y 90'.

En ese sentido, la transición representa para la izquierda y el mundo progresista un período complejo. Esta forma compleja de relacionarse en torno a una democracia que tiene una ampliación de libertades, pero con este censor detrás que finalmente es un auspicio de la violencia. ¿Qué elementos marcan a estos sectores? Hay una izquierda que se relaciona con la transición, ¿cómo piensas esta de nición de un segmento de la izquierda o con qué sector de la izquierda se asocia a tu trabajo?

En ese momento no se puede hablar de una izquierda. Habría que hablar de varias izquierdas, ni siquiera de dos. El Partido Comunista queda fuera. Pero también, por ejemplo, el Partido Socialista va a sufrir matices, bastantes matices. El PPD para qué decir. La misma Democracia Cristiana va a ser más de una. Ya no van a ser cohesionados. Más bien, empieza una colonización del sistema y de las lógicas del sistema sobre los partidos. Eso me parece bastante visible. Lo que se entendía como elementos cohesionados frente a determinadas demandas o prácticas, se empieza a fraccionar. Viene una cuestión basada casi en sujetos que lideran ciertas formas de hacer política frente a otros. Vino una disgregación de los centros neurálgicos de los partidos y, más bien, ellos pasan a hacer una cierta aceptación más o menos acrítica del sistema.

Eso va a ser muy complicado para lo que se llamaría la izquierda, porque la izquierda pierde su impronta. La izquierda se re-

cicla con algo que tiene que ver con algo progresista, pero no con velar de manera irrestricta por mejorar las condiciones de vida. Por otro lado, de nuevo esa relación tóxica con la derecha. Hubo ahí una reterritorialización de todo: del pensamiento, pero también de los cuerpos, porque empezó una cosa más compleja, donde la izquierda y la derecha veraneaban en los mismos lugares, vivían en los mismos barrios, iban a los mismos colegios. Entonces ahí se produjo una cuestión, bastante complicada, porque también los años noventa fueron los años de un arribismo extremo, la idea del *winner* y el *loser*. Ahí es cuando se articula y ensaya una violencia más o menos grande. Creo que ahí entró en esa lógica una izquierda que se debilitó.

¿Cómo se discute ese escenario político y qué lugar ocupa un activista cultural en este contexto? Por ejemplo, tu misma decías, en esta relación de contubernio corporal de estos mismos sujetos, ¿cómo los relacionamos con escenarios simbólicos, en tu literatura sobre todo?

Todo este cambio permeó también la cuestión editorial. En cierto sentido tocó lo literario, porque se abrieron editoriales nuevas, también diarios de crítica que antes eran extraordinariamente minoritarios, aunque también hubo cierres de muchos medios. Efectivamente, hubo una visibilidad mayor para el ambiente literario, crítico y cultural. Sin embargo, yo no entré en ese vértigo —si tú quieres— de la transición, me mantuve más o menos en una línea de trabajo que no era lo que el mercado quería y no tuve la certeza de que todo era genial y que había que mirar para adelante, que era la idea que se tuvo. Entonces, me mantuve más o menos en los espacios que yo pensaba que tenían que ser mirados, de los que no me he movido. Seguí mirando más o menos esos espacios más críticos del espacio social. Tal vez quedé más anclada, si tú quieres, por tener una posición. No integraba la Nueva Narrativa, estuve más lateral. Quería estar aquí porque no me parecía eso de hacer un festejo tan acrítico de las nuevas condiciones, aunque valoraba mucho que se hubiera acabado el estado de excepción. Seguí trabajando sin mirar el mercado editorial. Y, como ya tenía algo, pude seguir publicando sin dificultades, pero no en los centros, sino, más bien en los lados más laterales. Por otro lado, como mujer, también tenía todas las limitaciones de género.

En los años noventa, y hasta la actualidad, se nos propone un mercado de la cultura —una cultura que es a rmativa— celebratoria. Y tú me dices acá, la Nueva Narrativa es una tendencia masculina, y tu literatura propone ahí un espacio de lo periférico, de una resistencia, mirando el sesgo de las articulaciones culturales. Me gusta pensar la literatura como un síntoma de una sociedad, ¿qué síntoma tiene tu literatura?

A mí siempre me interesaron los signos. Me interesó trabajar esos signos y darles una vuelta, si bien podemos pensar que la literatura no cambia el mundo, lo que sí puede hacer la literatura es cambiar la literatura, sus signos; abrirlos, expandirlos. El primer deber de lo literario es trabajar sobre su área.

Siempre me interesó una literatura más desbordada en relación a las pautas centristas o a las literaturas más pedagogizadas. Eso nunca lo dejé porque es una vía fundamental para mí. Lo primero de todo es preguntarse sobre los signos literarios y los centros literarios, dónde estarían los centros más establecidos, y cómo uno se inclina sobre esos centros o puede interrogar también el quehacer literario. Para mí la literatura es una experiencia, entonces busqué profundizar esa experiencia, lo que me ponía en un lugar no centrista. Y, por otro lado, donde estaba la mirada de todos esos signos era sobre lo masivo, pero que es periférico para la hegemonía, es masivo, esto es, lo desechable, lo no mirado, en fin. Me mantuve en esa política de mantener una mirada sobre esos espacios.

Esa mirada tiene una forma, es un activismo que se construye a contrapelo, es estar a contrarreloj de la época. Tú misma decías: no es celebratorio. No es una literatura adánica que surge de la nada. Más bien, hay un trabajo con una tradición cultural y con signos de rede nición. ¿Cómo pensamos esos mismos signos sociales de la exclusión, que pugnan por una inclusión? O sea, esta inclusión crítica que hace la literatura.

Todo confluye, el neoliberalismo no deja espacio sin colonizar, por eso se sostiene. Todo es un intento de colonización. En cuanto a la cuestión literaria, evidentemente, surgió una literatura muy intimista, donde la comunidad queda un poco afuera. Eso se dio en el cine, en la literatura más bien intimis-

ta, incluso en la literatura del yo, donde se exploraba la vida, la infancia, los padres. Hubo una cuestión sobre todo de ida hacia el espacio privado, hacia la familia, incluso. Una vuelta muy notoria al yo y a la familia.

En ese sentido había una conexión, no necesariamente lineal, con los parámetros del neoliberalismo, vale decir un *self* en un momento en que el yo es muy dudoso por la masificación, por la globalización, por las tecnologías. Entonces, ahí es donde yo creo que hubo un momento, tal vez necesario, porque por eso mucha gente escribió. Se sigue escribiendo porque el sistema se articula de determinada manera. Pero el punto es que ese no era el ímpetu literario que yo tenía, ni mi deseo literario, ni el deseo literario que tengo y espero que no tendré. Yo estaba en otro carril.

Esa misma privatización de lo social en lo familiar, en lo íntimo, en lo literario, es una codificación de la misma lógica de la transición, del neoliberalismo ¿Este es el gesto más maduro de esta articulación política que se expresa en lo literario?

Sí, se expresó. No puedes no relacionar esa explosión literaria con el sistema porque va para un solo lado: yo y mi familia y mi familia y yo, y ya. Entonces, está bien. Todo el yo, el yo muy fuerte, el yo biográfico o seudobiográfico, aunque nunca el yo es enteramente biográfico.

También esa articulación de lo social que pasa por un prisma de este yo, como si el yo no fuera una conjunción de lo social.

Sí, es el yo, yo, yo. La búsqueda de yo y mi vida. La necesidad en un sistema muy pequeño, de hegemonías muy pequeñas. Entonces mi necesidad de ser yo en ese espacio muy negado, pero en mi caso particular no era eso. Ahora, personalmente, le tengo miedo al sentido común, porque la pregunta es, ¿quién establece el sentido común?, ¿quién dicta cuál es el sentido común? A mi juicio, es la hegemonía, la dominación. Básicamente, en estos momentos, digamos, orientada por la acumulación de riqueza, ese es el sentido común. Yo estoy contra el sentido común, porque el sentido común apacigua y domestica.

Tendríamos que establecer otra instancia, menos domesticable, que no pase por establecer un sentido común, sino por establecer una diversidad muy horizontal de posibilidades, que no sea uno. Porque, ya ves, estas literaturas del yo son el sentido común literario, pero eso ¿a qué obedece?... sin negar que pueden ser muy buenas literaturas. No estoy juzgando, estoy leyendo, que es otro tema. No estoy diciendo si el libro es malo o el libro es bueno. Pienso que hay que repensar el criterio —precisamente hoy que estamos llenos de sentidos comunes—, sería bueno dejar el sentido común y pensar en otras articulaciones bastante más insensatas que el sentido común que nos han inoculado. Bastante más insensatas, porque si no lo hacemos —este es un ciclo muy largo— va a ser más largo todavía. Va a ser más largo porque tiene que haber articulaciones otras que rompan precisamente los sentidos comunes, pero no para instalar otros que van a ser lo mismo, sino que para dispersar. Creo que es momento de una dispersión que sea inagarrable por el sistema.

En tu trabajo hay una constante de trabajadores y trabajadoras, mujeres, sujetos que están en un estado de vulneración. En estos tiempos de reino del yo, instalar estos sujetos que son más colectivos es una forma de releer, ¿cómo estos últimos 30 años han afectado en esa línea tu trabajo?

Nunca dejé de mirar lo que tenía que mirar. No hubo centros, ni aspiraciones de pertenencia que no me dejaran lo que tenía que mirar y, desde luego, vi el genocidio obrero como un sistema, para pasar a estos trabajadores, flotantes, fundamentalmente tercerizados, o ver, en una ciudad muy territorializada como esta —una de las más territorializadas de las que yo conozco—, lo que ocultaba este territorio, es decir, dónde vive la mayoría de la gente. Ver esas vidas y este proceso de desagregación.

No hubo un proceso de integración, sino lo que hizo este sistema fue desagregar de la misma manera en que el consumo segmenta. Se empezó a segmentar a la población, pero para desagregarla de las estructuras que este neoliberalismo acepta. Entonces me interesó esta desagregación, los trabajadores del súper, la gente que vive en los *blocks* o los vendedores ambulantes, esta siempre es una cosa simbólica que va más allá de ellos mismos —para trabajar sentidos sociales—, más allá de

los mismos cuerpos. Me interesó cómo el sistema, cómo sigue desagregando y, por otra parte, está generando un excedente muy complejo, como es la delincuencia al nivel que la tenemos ahora. El número que tenemos ahora es muy alto. Yo creo que el neoliberalismo genera esa violencia, y eso se levanta contra el otro, es como un Frankenstein que se levanta contra los otros, es el enemigo. Este es un enemigo generado por el neoliberalismo a causa de tanta desigualdad.

¿Cómo estas trabas pueden construirse como plataformas para nuevos referentes críticos?

Pienso que esto es una cuestión general, hay microespacios y espacios más medianos, con algunas insurrecciones —no solo estudiantiles—, en todo orden de cosas, ha habido sujetos que han leído bien, ya sea por automarginación o directamente por reclamos, pero, claro, uno se puede poner en lo más evidente, por ejemplo, en cuestiones de salud, porque es uno de los lugares golpeados por el neoliberalismo de manera atroz, o la previsión, que es para todos.

Desde luego, un tema muy complicado que era la educación por la privatización. Ahora, la gratuidad es muy importante, claro, a pesar de que tiene defectos, porque van los recursos a las universidades privadas, derecho a las universidades privadas. Las sillas vacías están ocupadas por la gratuidad. La gratuidad en sí es el resultado de una lucha estudiantil que se enfrentó a un sistema neoliberal y el sistema respondió desde la única cuestión que podía responder que es desde el neoliberalismo. Por eso no fue una expansión de la universidad pública —una esperaba eso— una gran expansión de la universidad pública, sino que fue la misma condición para la universidad pública y una expansión para las privadas mediante las sillas ocupadas. Aun así, pongámoslo en otro registro, en el alivio que trae para la gente que puede estudiar gratis, y eso es muy positivo. Pero ahora estamos en el siglo XXI y el siglo tiene que cruzarse, cada siglo tiene momentos. Yo pienso que la cuestión feminista es importante porque ahí hay algo que puede ser muy interesante para el siglo XXI. Porque las mujeres somos la mitad de la población mundial y de Chile también. Somos un sujeto oprimido, especialmente, las mujeres de clase media y populares. La pregunta es por qué no ha habido una explosión. Y es porque las mismas

mujeres están colonizadas, en el imaginario están colonizadas, por lo tanto, repiten las ordenanzas hegemónicas, entendiendo la hegemonía como masculina. Entonces no hablo de hombres, hablo de poderes. Ahí, yo creo que se abrió una puerta y la gran puerta que queda es esa.

El liberalismo va a aceptar muchas cosas, va a aceptar la transexualidad, tú ves, por lo menos en los Estados Unidos, ahora España presentó una Miss España trans, es decir, el mercado va incorporando con mucha rapidez la cuestión de las subjetividades. Las coopta y las vuelve mercancía y las acepta. Problemas que se veían como muy difíciles, como el aborto, el divorcio que duró más de un siglo conseguirse, porque en el siglo XIX se presentan ya a las cámaras leyes de divorcio. O el aborto en tres causales que existía y va a ser repuesto. El aborto libre se va a conseguir porque se ha conseguido en otros países, el sistema cede ahí, pero hay algo que es inamovible, en todas partes del mundo, que es la diferencia salarial entre hombres y mujeres, eso no se ha movido.

La diferencia salarial y también la diferencia en los trabajos, el trabajo no pagado que es el trabajo reproductivo. Ahí hay una piedra que toma el feminismo.

La pregunta es porqué se mantiene esa desigualdad salarial: al mismo trabajo, diferente salario. Entonces ahí es donde está la voz más simbólica que es que se considera que la mujer vale menos. La única manera en que te paguen menos, a igual trabajo, es que valgas menos y, sobre ese menos, hay otros menos. Ahora, ese trabajo que tú señalas que es el trabajo de los cuidados, yo creo que ahí falló Marx porque lo nombró como trabajo improductivo, pero si no hay esos cuidados se cae el sistema.

Pero pongámoslo en la cara visible del poder: los trabajos pagados. Es ahí donde hay que entrarle. Para mí, el punto más central del neoliberalismo radica en la desigualdad salarial, pues esto lo sostiene. Ahí está el meollo, el capitalismo se sostiene en parte gracias a esta inequidad salarial. Ellos alegan porque la mujer es más improductiva. No, en Chile hay 1.3 hijos por pareja, los hijos son cada vez menos, es decreciente la tasa de natalidad... antes si tenían 10 hijos era posible, pero ahora no. Hay un margen ganancial, extremadamente ganancial al siste-

ma, entonces, la manera de entrarle a esta cuestión neoliberal es el salario de las mujeres. Primero que todo, las mujeres tienen que pedir eso. No se ha hecho nada al respecto. En cambio, las energías se basan sobre subjetividades donde el sistema sí cede. Es como con el Partido Demócrata norteamericano: si eres homosexual o transexual, sí, se van ganando esos espacios. Pero lo que no se toca es la riqueza, los centros de riqueza.

Volviendo a los nudos críticos de la transición. Estos politizan a diversos actores sociales, como el estudiantil, el feminista, que promueven nuevas políticas, ¿cómo es posible hacerse cargo desde la izquierda y el progresismo de las ambiciones de esos movimientos que cuestionan la separación entre la sociedad y la política?

Si bien hay un recambio, básicamente un recambio político dado por el Frente Amplio en sus diversas vertientes, siguen vigentes dos problemas, a mi juicio. Uno, la falta de conexión con el aparato social, en sus lugares más agudos y en sus lugares más próximos, yo creo que el FA se ha elitizado también, pero hay que esperar. Estamos hablando de algo muy nuevo, pero digamos la luz roja para estos movimientos es su relación con los movimientos sociales, no en el sentido elitista, sino que realmente con los espacios sociales conflictivos, donde se necesita una voz dialogante porque esos sectores tienen mucho que decir también. No se trata de ir a pedagogizar, se trata de ir a escuchar para ir a aprender. Segundo, se están repitiendo los mismos hitos del siglo XX, que tiene que ver con líderes hombres que están en todos los frentes, están ahí porque hay algo que impide que la otra [la mujer] llegué. Las maniobras de poder siguen, más o menos vigentes, y eso es negativo porque el mundo no está formado solo por hombres, tú miras los liderazgos y no ves nada distinto.

Por último, las estructuras, las estructuras siguen como presidente, como secretario... yo creo que hay que cambiar esa estructura. Por una parte, los liderazgos, compartirlos. Las mujeres que tiene el Frente [Amplio] por todos lados son muy inteligentes, no puede ser que no estén porque están oprimidas. Por otro lado, romper con esas metodologías de una pedagogía que ha demostrado que solo se van a escindir —porque todos quieren ser presidentes, todos quieren ser secretarios—. Hay

que romper esas estructuras —esto produce escisiones terribles— hay que hacer algo verdaderamente más horizontal, porque estas estructuras solo generan división por los deseos de poder, se producen escisiones que muchas veces son bastante simples, ni siquiera son ideológicas, son poder puro.

Pareciera que volvemos al inicio de nuestra conversación: sobre esta fragmentación de cierto progresismo en los noventa, que nalmente termina en contubernios, en pactos, y en esta desagregación social.

Hay puros pequeños liderazgos. A mi juicio, el Frente [Amplio] tiene que cambiar la producción de políticas para que, de esa manera, no sea una pura cuestión de poder y deseo, una cosa shakesperiana. Se transforma en Shakespeare, donde todos están dispuestos a matar al otro para tener poder —porque son cargos muy rimbombantes: hay presidentes, secretarios, toda una cosa que viene de los colegios, viene de la enseñanza media, todos tenían un presidente—. No, hay que hacer algo más democrático.

En términos de género, nalmente, esta seducción masculina del poder, mantener ese mismo deseo traducido en una lógica de dominación.

Entonces qué pasa, las mujeres se pliegan para ser vicepresidenta, es una lógica autodestructiva. Hay que buscar nuevas organizaciones, nuevas estructuras y deshacer esa cuestión tan vertical si se está tratando de democratizar un país.



FUENTE: pousta.com

“En el gobierno de Bachelet se inicia un punto de inflexión, la transición institucional a la democracia”

En su segundo período a la cabeza de la Municipalidad de Recoleta, Daniel Jadue se ha transformado en una figura nacional, fundamentalmente a partir de sus iniciativas comunales de ampliación del acceso a diferentes servicios, entre ellos, las renombradas farmacias y ópticas “populares”.

En esta entrevista, el también militante del Partido Comunista (PC), conversa con *Cuadernos de Coyuntura* respecto al proceso de transición a la democracia, el papel del PC en tal etapa y en la actual, y sobre los desafíos pendientes para las fuerzas de cambio y las vías posibles para abordarlos.

La transición representa un período complejo dentro de la historia política nacional, ¿Cuál crees que fue el papel jugado por la izquierda en ese proceso?

Para la izquierda fue difícil aceptar la transición, y en esto las izquierdas funcionaron a distintos ritmos. Una parte de la izquierda —cuando hablo de izquierda hablo de aquella parte del conglomerado que está por la superación del capitalismo como forma de organización social (no incorporo ni al PPD ni al PS, al menos el de la transición)— decide sumarse al proceso pese a no estar de acuerdo. Ese es el PC. Y esto porque, en definitiva, no existía una masa crítica que nos permitiera seguir insistiendo, después del acuerdo mayoritario que había en el país, en una tesis disruptiva, de tal manera de cambiar de cuajo el modelo. El PC se integra, y lo hace siendo víctima de la campaña de desprestigio más cruda realizada por la dictadura, a pesar de ser el partido más institucional y democrático de la historia de Chile.

Incorporarse significó un golpe bastante fuerte. Primero, porque la otra parte de la izquierda siempre criticó al PC por haber aceptado, entre comillas, las nuevas reglas del juego que iba a ser democrático. Nos trataron de “traidores”, de “vendidos”, aunque hoy, muchos años después, esos mismos se han dado cuenta de que esa era la forma. Si lo hubieran aceptado, quizás, hace veinte años, este país sería mucho más distinto. Pero hemos tenido un retraso porque las izquierdas tuvieron una posición mucho más radical. Incluso, una parte del partido —que fueron los que se descolgaron el 88’, el Frente Patriótico— los que deciden seguir una política al margen del partido y se desvinculan de éste. Ellos son parte de esa izquierda que no acepta y que pretende seguir dando la lucha por otros medios. Unos medios de los que nunca ha renegado el PC —aunque este sí situara, temporal y políticamente, dentro de los gobiernos de facto la posibilidad de la lucha armada—.

La izquierda juega un rol que no logra articularse como izquierda. Y este es el mayor éxito de la dictadura: la fragmentación de la izquierda. Ello es ayudado, además, por una gran hipocresía de una parte de los que conformaron la Concertación, fundamentalmente de la Democracia Cristiana, que, habiendo sido partidaria del Golpe, después nos pretende excluir. Todos los que son partidarios de la violencia política en el 73’ se ponen de acuerdo para

excluir al único que no era partidario de la violencia política en el 73'. Es bastante brutal.

Sabemos que esa discusión se reedita justamente en esta conmemoración...

Se empieza a dar un proceso en donde, persistentemente, la derecha y la Concertación se preocupan de excluir al PC y con esto también a las izquierdas. Porque las izquierdas deciden no subirse. Pero el PC, que decide participar, es excluido por la Concertación a solicitud de la DC y por la derecha, que hubiese preferido matarnos a todos. Por lo tanto, el rol que juega es uno complejo, es un rol que todavía no termina, puesto que la transición aún no termina. Este país todavía no es una democracia que se pueda llamar propiamente tal.

Ante la persistencia de estos cierres en la actualidad, ¿Es factible pensar cómo estas limitaciones nos permiten generar nuevas colectividades, una oposición que no solamente sea al gobierno actual, sino que a la administración de un modelo político heredado?

Primero, hay que entender que en el gobierno de Bachelet se inicia un punto de inflexión en que uno podría decir se inicia la *transición institucional* a la democracia. Y esto es bien importante entenderlo, puesto que, gracias a la conformación de la Nueva Mayoría —PC incluido— es que, ese conglomerado, profundamente socialdemócrata, se aleja de la socialdemocracia que ellos mismos habían venido sosteniendo durante 25 años.

Estoy hablando de las voluntades políticas. Ellos se acercan al PC, obligados por la pérdida de un millón de votos en 15 años de gobierno. Esto de que el gobierno de la Concertación fue tan exitoso lo repiten, teóricamente, todos sus dirigentes, pero lo que sintió el pueblo de Chile parece que es algo distinto, porque un gobierno tremendamente exitoso no pierde un millón y medio de votos en 15 años. Y esto, fundamentalmente porque la Concertación abandona el programa de la Concertación. Ella renuncia a llevar a cabo su programa y esto se vuelve en algo que motiva el desprendimiento de la gente respecto a la política. Chile se acostumbra a programas de gobierno que nunca se llevan a cabo. Pero con el último gobierno de Bachelet esto cambia. De hecho, el programa vuelve a ser el protagonista, y vuelve a ser un programa en disputa.

Aquí hay un cambio fundamental que logra el punto esencial: modificar el sistema político en cuanto a lo electoral, de tal manera de bajar significativamente las barreras de entrada, lo que, por ejemplo, permite la incorporación del Frente Amplio. O sea, si el PC no entra a la Nueva Mayoría —y no hace lo que hace— el Frente Amplio hoy día quizás no existiría. Porque, además, al Frente Amplio hay que entenderlo: es una configuración que nace para irrumpir en la política sin proyecto país. Y cuando digo sin proyecto país, me refiero a lo que claramente hemos visto en los últimos días: Vlado Mirosevic no tiene nada que ver con otra cosa del Frente Amplio, y esos dos extremos del FA no tienen ninguna sintonía en lo político, sino que es simplemente una alianza electoral para irrumpir en la política, y lo logran, pero gracias al cambio del sistema electoral.

¿Y qué elementos darían forma hoy a un programa transformador de esta oposición?

La nueva situación política. Porque la nueva situación política te abre la posibilidad de que la izquierda vuelva a pensarse a sí misma gobernando. Luego de la destrucción del candado más potente de la dictadura, se abre la posibilidad de que la izquierda junta en una primera vuelta pueda pasar a una segunda vuelta en el sistema democrático. Antes de este período, la izquierda jamás tuvo siquiera la imagen, siquiera la idea, de que fuese posible representar a una mayoría. Hoy día la hay.

A pesar de que la izquierda sigue estando en una deuda increíble, porque las izquierdas, incluido el PC y las fuerzas que son de izquierda en el Frente Amplio, siempre han apostado a representar a los desencantados de la política, y no lo han logrado. O sea, el Frente Amplio no es que atraiga a un 20% que nunca había votado y que se sume a la política, sino que rebaraja el naipe político, y lo que hace es repartirse de una forma distinta la torta electoral sin agrandarla significativamente, que era su gran promesa. Ahí el principal desafío de cómo nosotros, como izquierda, somos capaces de ir y cambiar para mejor la vida de esa cantidad increíble de personas que no vota, de tal manera que ellos pasen de la desconfianza inconsciente a la confianza inconsciente primero, y a la confianza consciente después.

En ese sentido, ¿cómo se produce la irrupción pública y política de nuevos actores sociales?

Te refieres a actores políticos. Te hago esa aclaración porque no concibo, no logro leer, que los movimientos sociales sean incorporados a la política. Los dirigentes de los movimientos sociales logran incorporarse en la política a través del rebaraje de la gente que ya estaba incorporada en la política, pero sus seguidores no se levantan en masa a votar, ni a participar, ni se incorporan. Es más, un tema sintomático: todos los que decían que los partidos políticos eran innecesarios, hoy día están vueltos locos tratando de conformar partidos y legalizarlos. Para entender la dificultad —y yo creo que esto es importante— que los movimientos sociales son complementarios de lo político y no son opuestos. Ni existe esa dicotomía, ni existe esa falsa contradicción que planteó, por ejemplo, la izquierda de los hermanos Ruiz, históricamente, desde su época de la SURDA para adelante. Hoy día ellos están por participar en la política, por hacer partidos políticos, por meterse a la institucionalidad y disputar dentro de la institucionalidad el cambio. Siempre llamó la atención que ellos fueran tan revolucionarios en Chile y tan reformistas en el resto de América Latina. En Chile no aceptaban lo que sí aceptaban en el resto de América Latina en los procesos bolivarianos, el de Correa, por ejemplo. Ahí hay una contradicción.

En este escenario también se expresa una separación entre la sociedad y la política. Tenemos procesos de abstención y, por otra parte, esta política de votantes acotada, que se reparte...

Yo no concibo la forma en cómo se dice. No creo que haya una distancia o una separación entre sociedad y política. Hay una decisión de la política de no incorporar a la sociedad, que es distinto. Entonces, cuando hay una parte de la política que decide ligarse con la sociedad, esto desaparece como tema. Por ejemplo, acá en Recoleta hemos vivido el proceso contrario. Acá la gente nos ve, nos lee y está todos los días en los medios y en la prensa esta forma de hacer política, que está íntimamente ligada a la ciudad.

Pero desde esa misma experiencia política actual, en el espacio municipal, ¿crees posible recomponer esta distancia profundizada durante la década de los noventa?

No es que lo crea posible, esta es la única posibilidad. Yo soy profundamente leninista. Si uno mira las etapas de la revolución,

cuando Lenin plantea el paso de una etapa —desde la derrota al incremento de la conciencia— del incremento de la conciencia a la preparación del cambio, y de la preparación del cambio a la revolución, o al cambio cuando uno está en el gobierno, uno ve que Lenin plantea una forma de pasar de la desconfianza inconsciente a la confianza inconsciente. Luego a la confianza consciente, y luego a la conciencia de vanguardia. Eso se hace, primero, trabajando en la incidencia, es decir, cambiando la vida de las personas para mejor. Luego, a través de ganarse la confianza de la gente, tú puedes influir en su forma de pensar y luego puedes influir, a través de cambiar su forma de pensar, en su conciencia política. Y luego de influir en su conciencia política puedes invitarlos a ser parte de un gobierno.

Así se hizo en Recoleta. Yo siempre lo recuerdo: en Recoleta, el PC tenía el 2% en el año 2000, e hizo un plan estratégico para llegar al gobierno en el año 2012. Y subimos del 2% al 10%, del 18% al 41% y del 41% al 56%, en un proceso continuo de cambio de la correlación de fuerzas y de incremento de la conciencia. Por lo tanto, no es que esto sea una posibilidad. Para nosotros, es la única alternativa. De hecho, por eso, entendiendo el triunfo del Frente Amplio como un triunfo propio, me quedo con un sabor amargo de cómo se ha vivido el proceso de parlamentarización de la política del Frente Amplio, porque, percibo, que se está cometiendo el mismo error de los procesos anteriores.

¿Qué actores estarían convocados a esta redacción de los vínculos políticos?

Todos. Aquí no pongo ningún obstáculo. Marx plantea algo sumamente sencillo: el mundo avanza hacia dos grandes clases, la de los propietarios y la de los no propietarios. Dentro de esto, dice Marx, hay una serie de configuraciones intermedias que, sin conciencia, participan de la política como si fueran segmentos distintos. Pero Marx dice que esas no son clases, pues estas sólo son los propietarios y los no propietarios. Por lo tanto, todos los que están aquí, desde la perspectiva del marxismo-leninismo, son sujetos en disputa y no enemigos de clase. Y al ser sujetos en disputa, absolutamente todos pueden caer en la política de alianzas. La izquierda no puede tener la pretensión de que Chile sólo vuelva al “esquema de los tres tercios”. No, nosotros necesitamos llegar al 50%. Y, para eso, tenemos que avanzar sobre esas capas a

las que, quizás, les faltan algunos elementos para entender en qué parte del mundo estamos.

Viendo que hay un desgaste de identidades partidarias o tendencias políticas heredadas de la transición, ¿cuáles son los elementos de la disputa que reactivan esta política de alianzas?

Creo que el elemento central es el incremento de la conciencia. O sea, los marxistas definimos conciencia como aquella propiedad de la materia de darse cuenta de su poder transformador de la naturaleza, para reproducir su existencia y satisfacer sus necesidades. Y, por lo tanto, en la medida que haya más gente que logre darse cuenta de su capacidad transformadora de su entorno, de la política y del país, para satisfacer sus necesidades, esto va a hacer mucho más sentido. Este es el elemento esencial, no hay otro. Por ejemplo, a mí me parece notable que, después de veinte años, una parte de la izquierda haya entendido que su capacidad transformadora, de su entorno y del sistema político, implicaba meterse al juego democrático. Eso para mí es un proceso de incremento de la conciencia. Llega un minuto en que salir a protestar todos los días, juntar un millón de personas en la calle, hacer todo lo que se hizo, que es maravilloso, no es suficiente. Y, ahí, viene el paso siguiente que, claro, para los comunistas fue mucho más fácil darlo porque somos un partido de 106 años de historia, que hemos vivido esto antes en la historia de Chile. Pero la otra izquierda venía de haber nacido, la primera generación fuera de la dictadura y, por lo tanto, no haber entendido, en primera persona, lo que se vivió en dictadura. Me parece que este es el elemento esencial, y también que se van dando las condiciones para que lleguemos a la unidad de la izquierda en breve.

¿Y podría haber elementos para hacer ese acuerdo programático y político en torno a la izquierda?

Lo único que está son los elementos programáticos... Es de lo único que nadie tiene duda.

Claro, eso en el largo plazo. Pero ¿cómo podríamos articularlos? Por ejemplo, se nombran las vías parlamentaria o municipal...

Recabarren decía que la vía parlamentaria debía dedicarse a legislar para convertir en ley las necesidades que venían del mundo municipal. Entonces, imagínate que en el Parlamento

ya se hubiera aprobado, por ley, la obligatoriedad de que todos los municipios tuvieran farmacias populares: habríamos resuelto de cuajo un problema y nadie lo estaría discutiendo. Imagínate, si desde el Parlamento se aprobara la posibilidad de que los municipios hicieran gestión inmobiliaria y tuvieran empresas de basura, de reciclaje. Yo creo que los elementos programáticos ya están. No los abstractos, que es otro error de la izquierda: van donde la gente que no está metida en política y la quieren convencer de que lo que necesitan es un cambio constitucional, sobre lo que todos estamos de acuerdo, pero si tú le dices eso a la gente para entrar y para motivarla a la política no hay nada más distante de lo que ellos esperan, no hay nada más imposible de entender, no hay nada más abstracto. Y la izquierda a veces no entiende que está trabajando con gente de pensamiento concreto que hay que volver a emocionar. Entonces hay que partir por otro lado para llegar a eso. Ese es el punto de llegada y no el de salida. Hay algunos que se equivocan, y que ponen los lugares de llegada como puntos de partida, y eso impide la generación de un programa.

Pero, entonces, ¿la relación entre lo parlamentario y lo municipal debería ser solidaria, o es una vía u otra?

Son complementarias. El tema es que la parlamentaria sola claramente no sirve. Llevamos 25 años tratando de hacerlo y la vía municipal nos entrega la necesaria complementariedad que la otra requiere para avanzar. Nosotros los marxistas pensamos que es la realidad la que determina la conciencia, y no la conciencia la que determina la realidad. Entonces, uno tendría que decir, bueno, cuántos años llevamos tratando de dar la pelea en la superestructura política —a través de la política de alianzas— cuando lo que necesitamos es cambiar la forma de organización social, de tal manera de fortalecer y desarrollar la fuerza propia. Que esto nos dé la posibilidad de jugar de mejor forma en la superestructura política.

¿En esa fuerza propia hay también una disputa del sentido común?

Por supuesto. Esa es la primera disputa, es la principal. A través de la gestión municipal, una cosa que se discutió durante 25 años, nosotros la demostramos con tres hechos esenciales:

cuando formamos la farmacia popular había 60 municipalidades que no tenían farmacias; cuando formamos la óptica popular 213 comunas no tenían óptica; formamos la librería popular cuando 287 comunas no tienen librerías. Logramos definir y dejarle meridianamente claro, a todo Chile, que el mercado no funciona ni le interesa el ser humano o el bien común, sino que opera sólo donde está la rentabilidad. Esto lo resolvimos de manera concreta. Además, hicimos una tremenda discusión respecto a qué nombre le poníamos a la farmacia popular, anteponiendo una decisión política: salimos a disputar el campo de lo popular. La UDI se llamaba “UDI popular”. Ese nombre duró 6 meses después de la farmacia popular, porque fue el único partido que salió a criticar y a tratar de destruir a la farmacia popular y, por lo tanto, el campo de lo popular fue reconquistado por la izquierda a partir de un gobierno local y dimos una discusión que nadie había dado. Nosotros no sólo disputamos el campo de lo popular, sino también el de la eficiencia, el de la eficacia, de la transparencia, de la probidad, de la innovación, de la participación —hoy día somos vanguardia en estos temas que antes parecían de propiedad exclusiva de la derecha—. Este es el campo de lo popular, este es el campo de la disputa del sentido común. Y creo que, en eso, hemos dado una batalla tremenda.

**CARLOS MONTES**

FUENTE: bcn.cl

“Creo que el desafío de comprender y acercarse a la sociedad está siendo un desafío para todos los actores de la política nacional”

Como presidente del Senado y uno de los liderazgos más visibles del Partido Socialista (PS), Carlos Montes ha venido promoviendo puntos de encuentro entre la oposición, en torno a temas conflictivos como la modernización tributaria presentada por el gobierno. Desde allí, y a propósito de una fecha tan significativa para su sector político, nos comparte su visión respecto al proceso de transición y los desafíos de las fuerzas de centroizquierda en el Chile actual. Aborda, además, las particularidades de la cultura política forjada en ese período, los debates pendientes y el papel que tanto a las fuerzas emergentes como a la izquierda histórica les cabe en este tiempo de balances y discusión.

Usted ha sido parlamentario desde 1990, cuestión que le brinda una mirada privilegiada sobre el proceso de transición a la democracia desde la esfera política. ¿Cómo caracterizaría ese proceso desde su propia experiencia parlamentaria?

Sin lugar a duda la transición chilena tuvo características muy particulares. Una de ellas fue que se detonara a partir de un plebiscito, es decir, por una vía institucional. Otra de ellas, extraordinariamente anómala, es que el exdictador siguió como Comandante en Jefe del Ejército, con una incidencia importante respecto de las Fuerzas Armadas. Este último asunto obligó a un diseño político que tenía como eje principal la consolidación democrática, esto sobre la base de las reformas concordadas el año 1989.

Estas reformas implicaban un avance respecto del modelo original de la Constitución de 1980, pero eran evidentemente limitadas. Este tipo de limitaciones también se expresaron al interior del Parlamento, donde los senadores designados significaban un obstáculo insalvable que obligaba a negociar buena parte (sino todas) las iniciativas de relevancia.

En el ámbito económico, hubo una clara estrategia, ideada esencialmente por Edgardo Böeninger, para avanzar en la solución de las demandas sociales por la vía de un crecimiento acelerado, para evitar el riesgo de una involución autoritaria producto de la insatisfacción de las expectativas. Ello implicaba un cierto grado de acuerdo con los grandes grupos empresariales del país, tendiente a estimular las inversiones y favorecer el empleo. Esto hay que tenerlo muy presente, porque significó, por una parte, efectivamente avances rápidos en algunas demandas sociales y el acceso de sectores importantes de la población a bienes y servicios, pero también llevó a generar un grado creciente de desigualdad, que es el que posteriormente detonará conflictos sociales, ya en las primeras décadas del presente siglo.

La transición, entonces, se ve fuertemente condicionada por estas características específicas de su diseño político, y resulta complejo observarla sin considerarlas en el análisis.

La transición representa para la izquierda y el mundo progresista un período complejo de la historia nacional. Considerando una mirada de largo plazo, ¿qué elementos marcan la identidad política de los sectores que condujeron tal proceso?

Como decía, la transición es un período inédito en la historia nacional y bastante complejo, con muchos matices y claroscuros. A veces tienden a uniformarse las posiciones y a simplificarse los debates, algunos de los cuales tuvieron mayor profundidad. En general, considero que hubo un gran consenso en todos los sectores en la necesidad de consolidar la democracia, a partir de un aprendizaje de ciertos errores del pasado, particularmente derivados de la falta de diálogo. Ahora, si lo vemos en cada sector específico, diría que hay elementos particulares.

En la derecha, se observan claramente dos sectores, que han subsistido a lo largo de su historia y que persisten hasta hoy. Uno liderado por la UDI —pero también compuesto por sectores de RN— muy vinculado al régimen militar, con una valoración positiva de su gestión, especialmente en lo económico, y con una menor sensibilidad ante las violaciones a los derechos humanos.

Al mismo, tiempo, hubo sectores más liberales o republicanos que veían la necesidad de avanzar más rápidamente hacia una democracia más en forma. Lamentablemente, por largos años primaron los sectores más duros. Ello frenó que las reformas constitucionales pudieran ver la luz con anterioridad: sólo el 2005 fue posible eliminar los senadores designados. De modo reciente existen nuevos sectores al interior de la derecha, como Evopoli, que representan visiones más modernas, con un mayor énfasis en las libertades públicas. Hay que ver qué peso logran en el sector para ir aquilatando la configuración actual y específica de la derecha en Chile.

En nuestro mundo, creo que el reencuentro del centro con la izquierda marcó profundamente el período. Fueron sectores que se separaron durante buena parte del siglo XX, pese a que, como se ha dicho, hacia fines de la década de 1970 había planteamientos bastante similares que fueron la base para lograr un acercamiento que, en mi visión del asunto, fue fundamental para recuperar la democracia, para consolidarla y para conseguir avances sociales en las décadas posteriores. Diría que la convicción en torno a la necesidad de esta confluencia (entre el centro y la izquierda política) fue una de las lecciones aprendidas y que sigue siendo necesaria, atendido el peso que la derecha tiene en nuestra sociedad, en lo político, en lo económico, en lo comunicacional.

Es posible afirmar que existen algunos nudos sin resolver en la herencia política de la Concertación —como proyecto y como cultura política—. Hay, por ejemplo, proyectos inacabados, diferencias políticas y discusiones pendientes. ¿Cuáles distinguiría usted como los más relevantes para el momento político actual? ¿Cómo diría que estos “nudos” inciden en el proceso actual de recomposición política de una alternativa de centroizquierda en Chile?

Respecto de lo primero, creo que lo fundamental es entender que la Concertación no era un espacio político homogéneo, había visiones diversas y también algunos matices. Evidentemente, la urgencia y complejidad del momento obligaba a los acuerdos y a morigerar las diferencias, pero es claro que estas existían. Así, por ejemplo, en los aspectos en que participé más directamente, como educación y vivienda, estos matices y diferencias profundas eran claros.

En educación había sectores que teníamos una mayor sensibilidad con la educación pública y que, por ejemplo, rechazamos el financiamiento compartido porque entendíamos que se iba a transformar en un factor de segregación, pero fuimos derrotados en esa disputa al interior del conglomerado. En vivienda pasó algo similar, con las políticas de la década de 1990 que masificaron la lógica de los *vouchers*, incluyendo la intermediación de las EGIS¹, en lugar de políticas más asociativas y con un rol más protagónico del ámbito público. Solo en los últimos años conseguimos que los presupuestos contuvieran facultades más directas para que los Serviu gestionen iniciativas.

Si bien son aspectos puntuales, yo creo que ellos expresan esencialmente una discusión que está pendiente entre nosotros y que tiene que ver con el rol del Estado en la sociedad. En esa época había mucho dogma y visiones simplistas. Prácticamente no se podía hablar del Estado sin que se cayera en la caricatura de que uno quería retrotraerse a la planificación central y los planes quinquenales.

El debate es otro y, en mi perspectiva de la situación política actual, éste sigue pendiente. La pregunta que debiera orientarlo es ¿qué rol puede y debe tener el Estado en una sociedad que necesita dar un salto en su desarrollo? A mi juicio, el modelo exportador de materias primas y de rentas financieras tocó techo y mostró

¹ Son organizaciones con o sin fines de lucro que asesoran a las familias en todos los aspectos necesarios (técnicos y sociales) para acceder y aplicar a un subsidio habitacional.

sus limitaciones, en términos de que nos deja extremadamente volubles a las contingencias de la economía y la política externas. En lugar de seguir funcionando en esa lógica deberíamos pasar a otra etapa. Para hacerlo, el Estado debe tener un rol más relevante, que abra espacios y tome iniciativa. Es lo que permitió a muchos países avanzar, basta ver la forma en que se desarrolló Corea del Sur.

Más aún, sin ir tan lejos, acá también lo hicimos. El desarrollo del sector forestal es gracias al impulso del D.L. 701, una política pública que genera una nueva industria. En la salmónica cultura ocurrió algo parecido. Es por eso por lo que me parece necesario superar esas inercias del debate político, abrir la discusión sobre cuál es el carácter del Estado que necesitamos, proponernos diversificar la matriz productiva y complejizar nuestra economía, de la mano de un rol más potente del sector público.

Ello supone, por una parte, una nueva generación de emprendedores, con disposición a correr mayores riesgos y con mayor impulso de iniciativa. Por otro lado, requiere de nuevas políticas públicas: hoy tenemos 10.000 millones de dólares de incentivos tributarios que vienen de otra época y que, en buena parte, pueden reorientarse hacia otros sectores e iniciativas. Diría que en esa discusión sobre el rol del Estado subyacen muchos de los desafíos que tenemos como país y, también, las perspectivas de acercamiento entre la centroizquierda.

Durante la última década han emergido importantes movilizaciones sociales (estudiantil, NO+AFP, feminista) que pujan por superar cerrojos que antes parecían fuera de la discusión política, por ejemplo, la recuperación de derechos sociales. ¿Cómo cree que este contexto rede ne las relaciones entre la sociedad y la política?

En primer término, quiero señalar que hay problemas que no son sólo nuestros. Comparto la visión de que las instituciones y la política atraviesan dificultades. Algunos intelectuales de renombre internacional, como el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, señalan que la ciudadanía percibe que el poder se separó de la política, que ésta no tiene ya herramientas para controlar un sector financiero que se globalizó, fuera del ámbito de las decisiones democráticas; y eso genera frustración y distancia

de la sociedad respecto a la esfera política. Es por tanto una dinámica que no se está dando solo en Chile.

A mi parecer, en nuestro país, al fenómeno general mencionado, se suman las consecuencias propias de una transición que tuvo algunos éxitos, que permitió a muchos sectores mejorar su acceso a bienes y servicios, pero que también produjo una enorme desigualdad y abusos. También los casos de corrupción y el financiamiento ilegal de la política han contribuido a profundizar tal distanciamiento.

Ello es lo que explota en la década pasada. Por una parte, jóvenes que nos dicen “no estamos de acuerdo con el modelo de sociedad transicional que genera segregación y desigualdad” y nos reclaman educación gratuita y de calidad. Lo notable de todo este movimiento es que logró trascender a su propia generación porque fueron capaces de convocar también a sus padres en torno a esa demanda. Por otra parte, tenemos una demanda por la situación previsional que no ha podido resolverse y donde el modelo privado, impulsado en la dictadura, pese a los cambios del 2008, no resulta suficientes.

Entonces surgen estas movilizaciones y yo creo que son tremendamente legítimas y positivas, porque muestran que, pese a las dificultades existentes y a esta visión global negativa que comentaba, sigue existiendo una base social activa que probablemente no participa de la política partidaria, pero que tiene opinión y es capaz de movilizarse e incidir en la vida pública nacional.

Es lo que señala el historiador francés Pierre Rosanvallon en su libro *Contrademocracia* (2008), cuando indica que el electorado ya no entrega toda la soberanía en una elección, sino que se reserva parte de ella y la ejerce a través de su opinión y crítica frente a quien ejerce el gobierno. Considerando tales antecedentes puedo afirmar, entonces, que por ello tengo una visión optimista. Es cierto que las instituciones (las políticas, entre otras) tienen dificultades, pero también es cierto que tenemos una ciudadanía que no es tan apática y distante como algunos piensan. Me parece que hay que volver a esa sociedad, buscar entenderla y ver sus características fundamentales. Es parte del desafío que los partidos y que quienes participamos activamente en política enfrentamos hoy.

No es fácil. Hay autores, como la socióloga Kathya Araujo que han advertido sobre la existencia de una ambivalencia en las visiones de los ciudadanos, pues muestran, al mismo tiempo, cierto reconocimiento frente a un sistema que les ha permitido acceder a ciertos bienes, pero también con un diagnóstico profundamente crítico de la desigualdad y de los abusos.

Los resultados de las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias contribuyeron a introducir elementos novedosos en el panorama político chileno. ¿Observa en el Frente Amplio a un actor político que jugará un papel relevante en la redefinición de los acuerdos políticos de la centroizquierda, pero también con capacidades para recomponer las relaciones entre política y sociedad?

Creo que la irrupción del Frente Amplio fue un elemento relevante de la última elección, pues (contra diversos pronósticos) tuvo un resultado presidencial y parlamentario importante. Si bien existen diversos análisis sobre las bases sociales que explican su rendimiento electoral, el que me ha hecho más sentido es uno que indica que capturó tres tipos de electorado. Un tercio de sus votos es el caudal tradicional de la izquierda extraparlamentaria, otro tercio son votantes que habitualmente buscan a quien sea una alternativa a los movimientos o partidos políticos tradicionales y, un último tercio, son ex votantes desencantados de la Concertación. Políticamente, el desafío del Frente Amplio es consolidar esa votación y sus diversas vertientes y está por verse si lo conseguirá.

En lo social, me parece que el asunto es un poco más complejo. Como he dicho, no veo tan claro que el Frente Amplio represente una relación tan diversa a la tradicional entre la política y la sociedad. Por lo menos sus movimientos más potentes, como RD y las dos vertientes del autonomismo tienen una vocación de poder y un modo de relacionarse con la sociedad no demasiado diverso a los partidos tradicionales. Creo que el desafío de comprender y acercarse a la sociedad está siendo un desafío para todos los actores de la política nacional y no sólo del Frente Amplio: también el Partido Socialista y otros actores tienen el deber de volver a la vida social y buscar allí las inquietudes y fundamentos para su accionar.

Yo preguntaría, por poner un ejemplo muy concreto: ¿qué están haciendo los partidos por fortalecer la educación pública, por exi-

gir desde las mismas bases sociales avances en la creación de los nuevos Servicios Locales? Como te mencionaba antes, me parece que es un desafío que cruza a todos los colores políticos.

Para cerrar, queremos invitarlo a realizar un balance en torno al papel del Partido Socialista en la lucha política democrática. Esto en referencia al proceso de recuperación y consolidación del orden democrático, como también respecto al actual curso de rearticulaciones políticas en la centroizquierda. ¿Cómo podría caracterizarse ese papel histórico del Partido Socialista en la política chilena desde una mirada puesta en el presente?

Creo que el Partido Socialista y otras fuerzas de izquierda han tenido, desde su fundación, un rol muy preponderante en los avances del movimiento popular. Todo lo que nuestro país y sus sectores populares consiguieron desde fines del siglo XIX ha sido fundamentalmente por la conjunción de un ascendente movimiento popular y partidos políticos de izquierda que lideraron y encausaron esas reivindicaciones.

Ello es válido para avances tan potentes como la seguridad social, la salubridad pública y la educación pública, considerando en este caso, los distintos hitos, como el estado docente o la ley de instrucción primaria. Algo similar ocurre con la recuperación de la democracia. A partir de la década de 1980 el impulso de los partidos (aún clandestinos) y de sus militantes, fue vital en la organización y movilización que posibilitó el 5 de octubre que este año se conmemora. Luego, ya en la consolidación de la democracia, el Partido Socialista asumió roles importantes en el ámbito (del poder) Ejecutivo, que han resultado importantes para impulsar ciertas políticas públicas.

Pienso que, en general, el rol del Partido Socialista ha sido relevante en la articulación de diversos sectores de trabajadores y clases medias para canalizar su participación en la vida política. Ahora bien, creo que, en el último tiempo, particularmente en este siglo, el ejercicio del Gobierno ha significado para el Partido Socialista cierto distanciamiento de la vida social. Ello, en todo caso, no es un fenómeno que afecta exclusivamente al Partido Socialista, sino a todas las colectividades: recuperar ese vínculo, ése es el principal desafío que enfrenta la política en el Chile del siglo XXI 🏠



FUENTE: senadorlatorre.cl

“No hemos sido capaces de construir un partido del desorden”

Cuadernos de Coyuntura conversó con Juan Ignacio Latorre respecto a la forma que asume el fin de la dictadura y la sociedad cuyos términos fueron pactados entonces. Más aún, como una de las voces más jóvenes de la política institucional, y como el único senador electo por el Frente Amplio el pasado año, conversamos también acerca de las proyecciones y determinaciones que debe tener una fuerza capaz de superar los marcos de la transición, y las condiciones que harían posible este nuevo ciclo político.

La transición representa un período complejo de la historia política nacional, sobre todo después del plebiscito y los años 90. ¿Qué rol piensas que ha tomado la izquierda en este largo aliento de la transición?

piensa que la transición fue pactada. Pactada no sólo en la interna de las fuerzas políticas de Chile, entre lo que era en su momento la oposición a la dictadura, los partidos de oposición, por una parte, y los militares, las fuerzas armadas, y la derecha por la otra. Sino también en un marco más amplio de lo que se estaba viviendo históricamente en el mundo en ese momento. Estamos hablando de todo lo que era la guerra fría, el comienzo de la debacle de los socialismos reales en Europa, la hegemonía con mucha fuerza de EE. UU. también. Esta arquitectura internacional, particularmente EE. UU., también tuvo un rol en la salida de la dictadura en Chile. Mi lectura es que, para EE. UU., en este escenario de guerra fría, de hegemonía internacional y en América Latina, de derrota de los socialismos reales, el modelo chileno y las reformas que se hicieron —la contrarrevolución que hizo la dictadura, la “vía chilena al neoliberalismo”— eran correctas para ellos, un buen modelo, un buen experimento. Pero necesitaba de continuidad y gobernabilidad, y la derecha no aseguraba eso. La dictadura y las fuerzas armadas tampoco aseguraban la continuidad de ese modelo, un poco por la inestabilidad interna, las protestas sociales, el intento de tiranicidio que fracasó.

En el fondo, había un escenario de mucha inestabilidad interna. Pero los cambios ya los habían hecho: la constitución del 80 la habían aprobado, el plan laboral de José Piñera lo habían aprobado, la creación de las AFP también de José Piñera, y con eso la creación de un mercado de capitales ya lo habían hecho. El código minero que abría la puerta a una desnacionalización de la minería también. Los cambios en educación, la municipalización, el debilitamiento de la educación pública, el debilitamiento de los sindicatos... Bueno, un montón de cambios que ya habían hecho. Pero esos cambios necesitaban gobernabilidad. Por lo tanto, quien aseguraba mejor la gobernabilidad era la centroizquierda, y no la derecha. En ese sentido yo creo que esto fue pactado. Esa salida fue pactada. Fue parte de la nego-

ciación, y es en parte el diseño de Jaime Guzmán. Ahí hay también una fragmentación de la izquierda también, de los partidos históricos: hay un quiebre en el eje PS-PC, y el PC queda afuera en una posición más dura. Queda en una posición marginal y testimonial, sin incidencia. Mientras tanto, el PS entra en un eje con la Democracia Cristiana, en subordinación a la Democracia Cristiana. Esa es mi lectura del escenario de lo que fueron los finales de los 80, en que se negocia todo el tema del plebiscito, el pacto --y ahí, Böeninger, y los otros arquitectos claves de la transición pactada. Era básicamente legitimar el modelo: se necesitaba una fuerza de centroizquierda que tuviera apoyo electoral y capacidad de gobernabilidad y de legitimización del modelo en democracia.

En ese sentido, está esa herencia del modelo que implica esta “apertura democrática”, pero también un modelo de desarrollo. Ahora hay un escenario actual que busca una recuperación de derechos sociales. ¿Cómo rede ne este nuevo contexto la relación entre sociedad y política respecto de ese escenario interior? Este escenario en que se conquistó una democracia con un pacto, pero ahora hay un cuestionamiento a ese pacto. ¿Cómo analizas esta nueva relación entre sociedad y política?

Yo creo que hoy estamos abriendo un nuevo ciclo que se está empezando a figurar, a dibujar. Todavía no está del todo claro. Pero se está abriendo un nuevo ciclo. Obviamente, el cambio al sistema electoral ayudó, porque emerge una fuerza como el Frente Amplio; la misma inclusión del PC en sus pactos por omisión y en su alianza con la Nueva Mayoría, les permite entrar en la institucionalidad y dejar de ser un partido testimonial que tiene baja influencia por fuera, y entra. Entonces, el cambio abre más el abanico, el “arcoíris”, por así decirlo, de fuerzas políticas.

Pero es un ciclo que está abierto a medias. Efectivamente hay un mayor cuestionamiento al modelo desde los distintos movimientos sociales, el movimiento estudiantil de los pingüinos el 2006, de los universitarios el 2011 con fuerza, pero también otros movimientos socioambientales, el movimiento feminista, regionalista, y distintas emergencias de movimientos sociales

que cuestionan de alguna manera este modelo. Pero no hay un proyecto alternativo claro ni hay una articulación de fuerzas, no hay una correlación de fuerzas que haga prefigurar que efectivamente va a haber una transformación del modelo. Perfectamente las fuerzas tradicionales pueden seguir administrando este nuevo ciclo.

También la hegemonía de EE. UU. está en cuestión, por lo que hay un escenario internacional distinto. La emergencia de China, las crisis internacionales, hacen que también incluso el neoliberalismo internacionalmente [esté en cuestión]. Hay medidas proteccionistas, hay innovación, por decirlo así, de los países. Entonces hay una cosa mucho más desordenada en términos internacionales, donde incluso vemos la emergencia de movimientos de corte de nueva derecha, de corte más neofascista en algunos casos, populista: un nuevo populismo de derechas en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, este nuevo ciclo está también abierto a nuevas configuraciones.

Y en ese sentido, dentro de estas nuevas configuraciones, ¿cómo apostamos a que una oposición política puede materializar esa ambición de los movimientos sociales, o trabajar con la política de esos movimientos sociales? ¿Cómo podría situarse una oposición en este escenario?

La oposición también es diversa. Las oposiciones son diversas. Yo creo que no hay una sola oposición. Y no hay una sola vocación de articulación con los movimientos sociales. O sea, desde el Frente Amplio tenemos una mayor sintonía, y con algunos movimientos sociales más que con otros. Es el caso, por ejemplo, del movimiento estudiantil, del movimiento feminista. Pero los movimientos de conflictos socioambientales, por ejemplo, desconfían del Frente Amplio, o de algunos sectores del Frente Amplio, porque no necesariamente hay mucha vinculación ahí, y hay diversidad. El movimiento mapuche también es un ejemplo.

Entonces, yo no diría que toda la oposición está en una lógica de articulación con los movimientos sociales. Yo creo que en las oposiciones todavía hay partidos tradicionales que quisieran simplemente recoger las demandas de los movimientos sociales, un poco lo que hizo la Nueva Mayoría. Recogen las demandas del movimiento social, elabora un programa reformista

pero ambiguo para captar el apoyo popular electoral, y después en el gobierno, según la dinámica, la correlación de fuerzas y la contingencia, se avanza más o menos. O se cierra, y esa posibilidad siempre está abierta. Entonces creo que hay algunos en las oposiciones que tienen más esta vocación de poder, de decir “bueno, recuperemos rápido el poder porque no es posible que Piñera esté gobernando y la derecha que se puede proyectar 8 años”, que es verdad, y que esto no podemos permitirlo por ningún motivo y hay que recuperar como sea el poder, sin una honesta reflexión sobre qué proyecto ofrecerle a la sociedad. Y en ese sentido, la inercia de las fuerzas de la transición, la inercia de la Concertación sigue viva. Algunos la dan por muerta, pero sigue viva.

Esta inercia que describes depende de la separación entre política y sociedad. Esta manera de operar, de recoger ciertas demandas y articularlas desde la política, pero separados de la sociedad, es una forma como se pactó la transición. Entonces me gustaría también pensar qué hechos han generado esta distancia respecto de la política formal y cómo también hay una clase política que se organiza en torno a esa distancia entre política y sociedad. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa distancia actualmente?

En una articulación de Estado, mercado y sociedad, en estas tres grandes esferas, muchos partidos políticos tradicionales, desde la posición del Estado, han construido una relación mucho más cercana, estrecha, de colaboración y de sinergia con el mercado que con la sociedad. Los incentivos han estado puestos ahí. 20 años de gobierno continuos, cuatro gobiernos continuos, y un quinto gobierno de la Nueva Mayoría, dieron cuenta de que esa relación estrecha está, se ha construido desde cierta elite política, ciertos partidos políticos, operadores políticos, con el mercado. Con el mercado de la educación, con el mercado de la salud, con el mercado de las AFP, con el mercado minero, con el mercado de las forestales, con el mercado de los grandes grupos económicos. Esos vínculos están, y siguen operando para que haya status quo, para que no cambie mucho ese *status quo*, el poder que tienen los grandes grupos en la sociedad chilena.

Lo que ha faltado son más actores políticos que quieran vincularse más con la sociedad que con el mercado. Con la sociedad civil, los movimientos sociales, sindicatos, estudiantes, pobladores, comunidades, etcétera, y ponerse en esa articulación. Y yo creo que en las oposiciones hoy día eso me atrevería a decir que en parte se está en esa lógica. No sé en qué porcentaje, pero perfectamente podría ser un 50% de la oposición en esa lógica, y otro 50% que está en la otra lógica y simplemente quieren recuperar el poder porque les ha acomodado el poder, les ha ido bien.

¿Cómo podríamos pensar que actores podrían ser claves como para rede nir esa disputa? El progresismo y la izquierda, por ejemplo.

Durante la Concertación se construyó lo que se llamó el “partido transversal del orden”, que trasciende los límites de las militancias, con gente de la DC, del PS, del PPD, vinculados también con el mundo empresarial y la derecha, como un partido del orden, del status quo. Yo creo que, desde las izquierdas, desde el progresismo, desde las versiones críticas al modelo, no hemos sido capaces de construir un partido del “desorden”, o de un “nuevo orden”, o de una nueva “gobernabilidad transformadora”. En el fondo ellos han vendido, y ese ha sido su éxito político, la gobernabilidad neoliberal, eso le vendieron a la sociedad. Pero nosotros no hemos sido capaces de construir una nueva gobernabilidad, que supere el neoliberalismo, una gobernabilidad transformadora. Eso hay que construirlo, esas alianzas, esos tejidos que van más allá de las militancias. Porque puedes tener gente dentro del PS, dentro del PC, incluso dentro de la DC, de RD y del Frente Amplio, que estén por esta nueva gobernabilidad. Y bueno, ciertamente los movimientos sociales siguen teniendo un rol clave, en la medida en que impugnen y no se dejen cooptar, en la medida en que tengan capacidad de incidencia real. Por ejemplo, el movimiento No Más AFP logró instalar grandes movilizaciones en la agenda de las pensiones. Pero no fue incidente, porque el gobierno de Bachelet igual no recogió esa demanda, y el gobierno de Piñera tampoco la va a recoger. Entonces, no sirve sólo marchar. No sirve sólo marchar. Es importante, porque instala temas en la agenda. Pero

si no tienes capacidad real de incidencia para generar o abrir los cambios en la disputa, se queda como un movimiento que después se desgasta, se divide y pierde fuerza.

¿Qué elementos estarían en juego para la construcción de esa oposición? Sobre todo, pensando que hay un cierto desgaste de las identidades partidarias, y hay una tendencia al desarme de las identidades partidarias. Tú mismo lo señalabas: están estos polos críticos desarticulados, junto con ciertas demandas sociales. ¿Qué elementos podríamos pensar que nos ponen en juego, por ejemplo, los derechos sociales, para poder pensar en un programa de la oposición?

Yo creo que la demanda por una nueva constitución sigue ahí. Para mí, es clave porque es la que permite abrir la disputa de la política real. Una nueva constitución, construida en democracia, democráticamente, que mire los desafíos del siglo 21. Hago la analogía con lo que fue la constitución de 1925, la constitución liberal del 1925, que abre el espacio para la disputa política. O sea, esa constitución de 1925 permite un gobierno reformista de Pedro Aguirre Cerda, permite la construcción de la Corfo y su programa de industrialización. Permite después un gobierno de Frei Montalva que hace la reforma agraria y la chilenización del cobre. Y permite un gobierno de izquierda de la UP que incluso se plantea la vía chilena al socialismo. O sea, esa constitución de 1925 abre décadas de acumulación de fuerza, donde los partidos hacen política y disputan y tienen la posibilidad real de llevar sus propuestas para que tengan incidencia. Nosotros podemos levantar un programa de transformaciones, pero si no modificamos la constitución, nuestras propuestas van a ser todas declaradas inconstitucionales. Van a ir todas al Tribunal Constitucional, como lo que ocurrió con la tímida reforma educacional.

Claro, está el caso de la reforma educacional, el caso del aborto...

Y así si vas a los temas previsionales, laborales, o medioambientales. O sea, el Estado subsidiario, la propiedad privada por sobre el bien común, los derechos individuales por sobre los sociales. Yo no pretendería tener la constitución que garantice el socialismo democrático, que es lo que me gustaría a mí, sino una que abra, que sea una constitución que se construya en de-

mocracia, que sea democrática, que mire los desafíos del siglo XXI, y abra el espacio de la disputa para que la política tenga incidencia real. Yo creo que eso sigue pendiente.

Y, ¿qué interacción habría con las fuerzas sociales capaces de organizar ese movimiento constituyente? Sabemos hasta ahora que hay un gesto desde el Frente Amplio, vemos que hay una descomposición de lo que fue la Nueva Mayoría, del progresismo. Entonces, una rearticulación tiene que instalar esa disputa. ¿Es posible que se articule? ¿Sería ese el cierre de una transición, por ejemplo?

Yo creo que esta nueva constitución sería lo que de verdad le daría apertura al nuevo ciclo. El ciclo está abierto, pero puede cerrarse, está aún incierto eso. Pero una nueva constitución de verdad mostraría que estamos en un nuevo ciclo político. El cambio al sistema electoral abre un poquito la ventana. Pero esto sería abrir las puertas a un nuevo ciclo político. La articulación siempre es posible, pero en torno a esa demanda. Esa es una crítica que yo le hago al gobierno de Bachelet, de la Nueva Mayoría. Ellos prometieron que esta era una de sus principales reformas, era una de sus tres prioridades: educación, tributaria, y nueva constitución. Y finalmente terminaron con un proceso constituyente aguachento, no vinculante, más bien de carácter folklórico, de educación cívica. Este proceso no tuvo ningún impacto, y presentaron después un proyecto al final que dejaron caer más como un saludo a la bandera. Y perdimos.

Y tampoco había una fuerza social detrás de ese proceso.

No hubo una fuerza social ni hubo voluntad política, ni del gobierno ni de la coalición para concretar algo, algún avance. Entonces yo creo que el mínimo de un nuevo acuerdo programático de fuerzas transformadoras es ese. El mínimo.

Pensemos en esta plataforma. Tenemos la formación de una oposición al gobierno actual, y también la formación de una política en contra del modelo heredado. La constitución sería uno de los elementos que pararía esta oposición política. ¿Qué otros elementos podrían ser la punta de lanza de estas nuevas fuerzas sociales?

Los derechos sociales, la nueva constitución que garantice derechos sociales, agenda de pensiones, agenda de educación y salud, por nombrar tres que son básicas. En el fondo, es un programa transformador del neoliberalismo, un programa antineoliberal. Puede haber mucha diversidad en su interior, pero al menos tiene que ser antineoliberal. Y luego, por lo menos una discusión sobre el modelo desarrollo y el rol del Estado, tomando en cuenta los conflictos socioambientales, por ejemplo. Cómo pasamos de este Estado subsidiario a un Estado empresario, un Estado que interviene en la economía. Y, sobre todo, la superación del extractivismo. La extracción de recursos naturales, sin valor agregado, el tema del litio, el tema del cobre, el tema de los recursos naturales forestales. Cómo podría intervenir más el Estado en esa articulación de un nuevo modelo de desarrollo. Ciencias, tecnología... Estos creo que son algunos aspectos claves que podrían congrega fuerzas progresistas antineoliberales amplias. La agenda del feminismo también.

Podríamos pensar que estos serían los elementos que nos darían pie para construir un programa de una futura oposición. Pensar la redacción del rol del Estado, incluye, por ejemplo, derechos sociales y reproductivos.

Claro, el programa de un futuro gobierno. Porque la oposición se está dando hoy día frente a la agenda del gobierno, la agenda tributaria, la agenda de pensiones que se dice que va a entrar ahora. Respecto a educación, el reemplazo del CAE. O sea, hay una oposición hoy en día que dialoga con las banderas del gobierno, con las propuestas del gobierno, con la agenda del gobierno, que es una oposición. Pero podemos quedarnos permanentemente siendo oposición.

Esa oposición ha sido reactiva.

Claro. El tema es que, como no somos gobierno, es difícil construir un programa de oposición.

El programa del gobierno se hace con estas alianzas. Pero también se pueden pensar las bases ideológicas de esta agenda programática de rediseñar la relación entre sociedad y política. Se construye una nueva forma de la sociedad.

¿Cuál sería el programa de esa “nueva” sociedad, pensándolo en términos más ideológicos que programáticos o electorales?

Yo creo que ideológicamente es la impugnación al neoliberalismo. Es construir una fuerza antineoliberal, o posneoliberal, un modelo posneoliberal de una nueva gobernabilidad. Los ejes centrales son una nueva constitución que garantice derechos sociales, un nuevo rol del Estado que supere el Estado subsidiario, un nuevo modelo de desarrollo que supere el extractivismo, y por ende todo lo que implican los conflictos ambientales relacionados al extractivismo, la agenda feminista. Se me pueden escapar algunos elementos, pero por ahí lo grueso. Es un poco lo que construimos nosotros desde el Frente Amplio, este programa transformador del neoliberalismo. Después, claro, se discuten cuáles son los límites: si va a ser una agenda solamente socialdemócrata, por ejemplo, o si abre el camino a la superación del capitalismo como un debate de largo plazo en el siglo XXI. Yo estoy por abrir ese debate. Pero en el corto y mediano plazo, yo creo que lo urgente es superar el neoliberalismo, conquistar derechos sociales, conquistar un nuevo rol del Estado, una nueva constitución que abra el debate de la política, la descentralización. Yo no pondría como condición de esta articulación de fuerzas transformadoras la superación del capitalismo, porque, si no, te quedas con una fuerza muy pequeña. Yo creo que hay que dar ese debate. Hay un debate cultural también, un debate ideológico de largo plazo. Pero al menos, y esto sí puede tener más convergencia de amplias fuerzas políticas y sociales, la superación del neoliberalismo actual 🌱

**CLAUDIA MIX**

FUENTE: pajaritosfm.cl

“Si el FA no asume que existe para transformar la política y el modelo, estamos más cerca de convertirnos en una mala copia de la Concertación”

La diputada de Poder Ciudadano es una de las voces nuevas que ha llevado la irrupción del Frente Amplio en el Congreso. En esta entrevista con *Cuadernos de Coyuntura*, aborda, desde su amplia experiencia como dirigente social y política, la situación de la izquierda en la transición, a la vez que enfatiza en los desafíos que mantiene su coalición frente a los nudos heredados de este proceso.

Habiendo usted sido dirigente estudiantil en los últimos años de la dictadura, en democracia va a desarrollar una amplia actividad social y política. ¿Cómo caracterizaría el período de la transición desde esa experiencia?

La transición se puede caracterizar como un período de acomodado y reorganización tras un proceso intenso de lucha contra la dictadura. Creo que hubo una importante cuota de inocencia de quienes participamos desde la organización social en la lucha contra la dictadura de Pinochet, porque dejamos que quienes negociaron la transición hicieran todo “en la medida de lo posible”.

Creo que ahí estuvo el problema: que, de cierta forma, nos fuimos para la casa a partir del 11 de marzo de 1990 y no mantuvimos la presión para llevar adelante el programa que presentaba la Concertación, que, recordemos, incluía, por ejemplo, Asamblea Constituyente y aborto legal, cosas que se borraron con el codo de inmediato apelando a la “gobernabilidad” y esas frases grandilocuentes que se usaron en los noventa para la defensa del neoliberalismo que se estaba administrando.

La transición representa un periodo complejo dentro de la historia política nacional, ¿Qué papel jugó la izquierda en ese proceso?

Eso tiene relación con lo que respondía antes. La izquierda se quedó, tanto por acción propia como por acción de la Concertación, al margen de la discusión porque se instaló en el imaginario colectivo el discurso anti izquierda, tras acusarla del golpe de 1973, teoría de los extremos, entonces nuestras propuestas quedaron fuera. Y no fuimos capaces de adaptarlas a los nuevos tiempos que llegaron. De hecho, hubo que llegar a un cierto punto de hastío para que las propuestas de izquierda fueran consideradas, primero, en las presidenciales de 2005, con la candidatura de Tomás Hirsch, y luego, en 2009, con la candidatura de Arrate. Entonces la izquierda chilena ha resurgido gracias a que el modelo neoliberal instalado tuvo su crisis y se abrió un margen de acción. Creo que no podemos estar esperando que se nos abra el espacio, sino que debemos estar en permanente preparación de diferentes escenarios de acción política.

Aunque la transición abre un período de convivencia democrática, puede afirmarse que parte de la herencia de la Concertación son una serie de debates omitidos o derechamente cancelados que han tendido a proyectarse como nudos irresueltos a nuestra época. Un ejemplo es la discusión sobre el modelo de desarrollo. ¿Cómo esos nudos inciden en la recomposición política de las fuerzas de oposición y en las posibilidades de construir una alternativa democrática?

El modelo social, político y económico que se terminó de instalar en los noventa y la primera parte de los dos mil tiene por objetivo evitar por cualquier medio la articulación social y crear una “sensación” de estar organizados a través de causas particulares, pero que, a la larga, no tenían incidencia ni intención de transformación social. Desde esa perspectiva es que la reorganización de las fuerzas políticas y sociales en un bloque ha sido tan compleja, porque nos acostumbramos a cuidar nuestra parcela —cosa muy neoliberal— y no pensamos en la forma de llevar adelante un proceso de transformación. Ahora la reconstrucción de las fuerzas políticas que se está llevando adelante en este último tiempo es, en parte, resultado de las experiencias políticas y electorales de los últimos años, a partir de los cuales se ha podido —con todas las dificultades posibles— construir lo que es hoy el Frente Amplio.

Desde esta perspectiva, otro nudo que nos ha dejado la Concertación es el tipo de democracia que tenemos, democracia representativa, la que no permite la real participación de la gente en la toma de decisiones sobre su vida cotidiana. No somos ciudadanos de plenos derechos y ahí el Frente Amplio tiene mucho que decir.

¿Cuán cerca o lejos ve al Frente Amplio de contribuir a superar esos nudos en la situación política actual?

En la medida que el Frente Amplio asuma con responsabilidad colectiva que existe para transformar la política y el modelo instalado en el país hace 45 años, será capaz de desatar los nudos que nos han impuesto. De otro modo, siendo muy sincera, estamos más cerca de convertirnos en una mala copia de la Concertación, cosa para la que, al menos desde Poder Ciudadano,

no estamos disponibles. Debemos responder a las expectativas, confianza y demanda del millón de personas que nos votó para seguir creciendo y poder concretar nuestras propuestas para transformar Chile.

En la última década han emergido importantes movilizaciones sociales que han pugnado por destrabar cerrojos que antes parecían fuera del debate, por ejemplo, la recuperación de derechos sociales. ¿Cómo ese contexto rede ne las relaciones entre la sociedad y la política?

Lo que sucede con esas movilizaciones es que representan a importantes sectores sociales. Estos son los nudos de los que hablábamos, que fueron heredados desde la transición. Y es la ciudadanía la que impulsa la discusión, el debate y el sistema político no tiene respuestas porque sigue encapsulado en la lógica de la transición, desde arriba, y es ahí donde el Frente Amplio debe cambiar la relación actual entre la sociedad civil y la política. La democracia participativa debe transformarse en una práctica tanto al interior de nuestras organizaciones como partidos y en su relación.

¿Qué papel puede jugar el Frente Amplio en un escenario de rede nición de los acuerdos políticos entre las fuerzas de la actual oposición?

Protagónico. Nuestra práctica política nos pone en un muy buen pie, claro que hay cosas que tenemos que hacer primero y una de ellas es armar una oposición nosotros como Frente Amplio y con un relato diferente. Eso no lo tiene la ex Nueva Mayoría. Ese es nuestro gran desafío: poder unificar criterios a partir de principios claros 🌱



Entre el mercado gratuito y la educación pública

Grupo de Estudios de Educación de Fundación Nodo XX

El pasado 28 de agosto, en la Casa Central de la Universidad de Chile, se realizó el lanzamiento del libro **“Entre el mercado gratuito y la educación pública”**, escrito por el Grupo de Estudios de Educación de Fundación Nodo XXI, encabezado por el sociólogo Víctor Orellana. La cita tuvo como presentadores del texto al subsecretario de Educación Raúl Figueroa, el senador Carlos Montes, el rector de la Universidad de Chile Ennio Vivaldi, la periodista María Olivia Mönckeberg y Silvia Aguilera de Lom Ediciones. El libro ofrece una lectura sobre los nudos históricos y sociales que explican la configuración actual del sistema educativo chileno, así como las posibilidades de reconstrucción de la educación pública para el presente.



